

45.^a SESION ORDINARIA — SEPTIEMBRE 15 DE 1888

Presidencia del señor CAMBACERES

Ministro presente: del interior.

Senadores presentes: Baibiene, Baltoré Barros, Cambaceres, Dávila, de la Silva, del Valle. Derqui, Febre, Funes, Gil, Mendoza, Moyano, Navarro, Nougés, Oliva, Ortega, Paz, Pérez, Pizarro, Rodríguez (C. J.), Ruiz (H.), Ruiz (M.), Tello y Zapata.

Senadores ausentes, con licencia: Rocha y Rodríguez (M. F.).

Senadores ausentes: Gollán y Ortiz.

SUMARIO

- 1.—Asuntos entrados.
- 2.—Continúa la discusión del proyecto de ley sobre matrimonio civil.
- 3.—Moción del señor senador del Valle para levantar la sesión. Se aprueba.

—En Buenos Aires, a quince de Septiembre de mil ochocientos ochenta y ocho, reunidos en su sala de sesiones el señor presidente y los señores senadores arriba inscriptos, se abrió la sesión con inasistencia de los señores senadores Gollán y Ortiz; y con licencia, Rocha y Rodríguez (M. F.).

Leída y aprobada el acta de la anterior de 13 del corriente (44.^a ordinaria), se dió cuenta de los siguientes asuntos entrados:

1

Comunicaciones oficiales

El Poder Ejecutivo acusa recibo de la ley concediendo amnistía por todo delito político anterior a ella y de la ley número 2.279. Al archivo.

—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo abriendo un crédito de 580.606 pesos para el Departamento de Relaciones Exterio-

res, para gastos extraordinarios de las oficinas de información. A la Comisión de Hacienda.

—Mensaje del Poder Ejecutivo apoyando la solicitud de jubilación interpuesta por el señor Benjamín Villafañe, actual rector del Colegio Nacional de Jujuy. A la Comisión de Peticiones.

La Honorable Cámara de Diputados envía en revisión los siguientes proyectos de ley:

Declarando obligatorio el pago del afirmado en la capital de la República. A la Comisión del Interior.

—Aprobando el proyecto de código en materia penal, presentado por la Comisión Revisadora, formulado por don Manuel Obarrio. A la Comisión de Legislación.

—Autorizando al Poder Ejecutivo para invertir hasta 160.000 pesos en la construcción de un puente sobre el río Dulce. A la Comisión del Interior.

—Autorizando al Poder Ejecutivo para conceder, dentro de los terrenos del puerto de la Capital, el establecimiento de líneas de tranvías. A la Comisión del Interior.

—Mandando practicar estudios para la construcción de un puente sobre el río V, frente a Villa Mercedes, (provincia de San Luis). A la Comisión del Interior.

—Autorizando al Poder Ejecutivo para invertir hasta 480.000 pesos en la construcción de dos puentes sobre el río Negro y otro sobre el río Colorado. A la Comisión del Interior.

—Acordando pensión a la señora Dolores Argüello de Cáceres. A la Comisión de Peticiones.

—Acordando a la señora Celina F. de Ruñol, presidenta de la Comisión encargada de recolectar fondos para la construcción del templo de la Merced, (provincia de Tucumán), la cantidad de 10.000 pesos. A la Comisión de Peticiones.

—Concediendo una subvención al Instituto de Sordomudos establecido por José M. Solá. A la Comisión de Peticiones.

—La misma avisa haber sancionado definitivamente el proyecto, que se le pasó en revisión, abriendo un crédito a la ley de 24 de Noviembre de 1887, referente al tratado sobre reconocimiento del territorio de Misiones. Al archivo; y devuelve modificado el proyecto, que se le pasó en revisión, acordando tierras al teniente coronel don José M. Gomensoro. A la Comisión del Interior.

Peticiones particulares

Varios solicitan no se apruebe el proyecto sobre matrimonio civil. Resérvese en Secretaría.

—Victoria Pérez de Rivadeneyra, viuda del subteniente don Jerónimo Rivadeneyra, solicita pensión. A la Comisión de Guerra.

—Juan Tomás Staud y Compañía, piden que al tratarse la propuesta presentada por la Sociedad General Pobladora, se tenga presente la presentada por ellos. A la Comisión del Interior.

—El presidente de la Sociedad Franklin, de San Juan, solicita se incluya la biblioteca del mismo nombre en los beneficios de la ley de subvenciones a la instrucción pública. A la Comisión de Peticiones.

—La comisión directiva del Hospital del Pueblo de la Nación solicita una subvención de 400.000 pesos. A la Comisión de Peticiones.

—Otto Arning, representante de la empresa Pueyrredón - Puente de Barracas, solicita venia del Honorable Congreso para demandar al Poder Ejecutivo. A la Comisión de Negocios Constitucionales.

—Cándido Novillo pide se autorice al Poder Ejecutivo para que le venda cinco lotes de terrenos de la estancia de Caroya, que quedaron sin venderse. A la Comisión del Interior.

—Felipa y Tránsito Angel solicitan pensión graciable. A la Comisión de Peticiones.

Despachos de Comisión

La de Guerra se ha expedido en los siguientes asuntos: Solicitud de aumento de pensión a la señora Rosa Tortes de Benítez; solicitud de aumento de pensión a la señora Concepción

Aguirre; solicitud de aumento de pensión a la señora Javiera Rodríguez; solicitud de aumento de pensión a la señora Juana García de Freyre; solicitud de aumento de pensión a la señora Adelaida Maroto; solicitud de aumento de pensión a la señora Dorotea Alustiza de Rodrigo; solicitud de aumento de pensión a la señora Paula Sarmiento de Gómez.

—Proyecto de ley, en revisión, aumentando la pensión a la señora María M. de Alzogaray. A la orden del día.

2

Sr. Presidente. — Se va a entrar a la orden del día.

Continúa con la palabra el señor ministro del interior.

Sr. Ministro del Interior. — Se pregunta uno cuáles son las causas actuales de oposición al proyecto que se debate, y cuáles han sido en otro tiempo las que han surgido cuando se han tratado cuestiones análogas.

Yo creo, señor presidente, que cuando se toma una cuestión en su origen y se le sigue la filiación y el desenvolvimiento, la demostración de una tesis, resulta más fácil, porque el mismo oyente o el mismo lector la desentraña de lo que va estudiando. Así, por ejemplo, si con citas parcas de la historia y con documentos traídos a propósito, se muestra cómo en esta cuestión ha habido una tendencia constante de la Iglesia, y una tendencia opuesta y constante de los Estados, la solución del problema resultará liviana, puesto que entonces es la misma historia la que hace brillar la verdad, sin que el orador o el escritor actual tenga gran trabajo para sacar a luz los principios con que ha de demostrar su tesis.

Hago esta introducción, señor presidente, para disculpar una vez más el que yo entre en ciertos antecedentes históricos, porque aun cuando en apariencia no tengan relación directa con mi tesis, ella va a salir de esos antecedentes.

Había dicho en la sesión anterior que no sólo era patente la tendencia de dominio de la Iglesia, sino que ella estaba demostrada por los documentos emanados de la misma Iglesia, que todo esto estaba comprobado por la historia general y por los mismos documentos del papado, de los obispos y de los prelados. Basta para ello recorrer las encíclicas y demás documentos emanados de la curia romana. En ellos se encuentra, no sólo el hecho comprobado, no sólo la teoría establecida, sino la dis-

culpa, la explicación, y hasta puede decirse la vanagloria de sus teorías.

Si se quieren pruebas, la historia las tiene numerosas. Aquí van las siguientes:

Gregorio VII, el fundador del papado omnipotente, el Papa que, puede decirse, ha reivindicado, está mal dicho, ha arrebatado a los concilios el poder que antes estaba en ellos, para ponerlo en las manos de los papas, decía: «El mundo está alumbrado por dos astros más grandes que todos los otros: el sol y la luna.»

Esa era la ciencia astronómica de aquel tiempo.

En el mundo moral el papado representaba el sol, y la reyecía la luna. Los canonistas estimaron entonces que el Papa era 47 veces mayor que cualquier rey; debieron decir, a estar a los datos astronómicos, que era seis mil veces mayor.

Se ve, pues, cuál era la dimensión de los reyes, y, por lo tanto, el poder de los gobiernos temporales con relación al que se atribuían los papas.

El mismo Papa al lanzar la excomunión contra Enrique IV, dirigiéndose a los apóstoles San Pedro y San Pablo, que están en el cielo, les dice: «Haced conocer a todo el mundo que si vosotros podéis atar y desatar en el cielo, podéis también sobre la tierra quitar y dar los imperios, los reinos y los principados.»

«Si vosotros juzgáis de las cosas espirituales ¡qué no se debe creer de vuestro poder sobre las cosas temporales! Y si juzgáis a los ángeles que dominan sobre los príncipes soberbios ¡qué no podréis sobre los esclavos!»

Se trataba de la suerte de un rey; el papa se atribuía la facultad de destituirlo como gobernante de su pueblo, y ratificaba sus teorías dirigiéndose a San Pedro y San Pablo, indicándoles que hicieran conocer esta nueva en el mundo entero: el poder de los papas, está sobre el poder temporal, puesto que se trataba de gobiernos temporales.

Pero, señor presidente, si se quieren pruebas más recientes, no hay más que leer las encíclicas de Pío IX.

Quiero decir ligeramente algo sobre la figura de este gran Papa, de este hombre de talento, de este pontífice, que ha ejercido tan grande influencia sobre la Iglesia y sobre los estados en la época más difícil, puede decirse, para la primera, pues que es la época de mayor civilización, y, por lo tanto, aquella en que los gobernantes contaban con mayores elementos para contrariar las tendencias de la Iglesia.

Se sabe que Pío IX, cuando subió al papado,

tomó ciertas medidas, tales como las relativas a los presos que el gobierno anterior tenía — no puedo designar cuál era la condición particular de estos presos — que hicieron concebir a toda la Europa la idea de que él se ponía al frente de un partido liberal, y que, por primera vez se vería la ilustración al servicio de las ideas religiosas y de las ideas liberales, uniendo la civilización con el catolicismo, y presidiendo esta unión el jefe de la Iglesia.

Pero, bien pronto cayó la venda de los ojos de los liberales, pues los actos posteriores de Pío IX sacaron pronto de su error a los que esperaban grandes beneficios de su gobierno.

A propósito de esto, los historiadores dicen con mucha razón: no sabemos qué pudo esperarse de la unión entre el catolicismo y la libertad.

El liberalismo, siendo contrario a la tradición de la Iglesia, no admite que sea concebible un papa liberal; porque, desde el momento que se hiciera la unión del liberalismo y de la Iglesia, los fundamentos de ésta vendrían por tierra.

Este Papa, que tenía tales antecedentes, ha sido el que ha suministrado verdaderamente la fórmula de todas las exigencias y de todas las pretensiones de la Iglesia durante los dieciocho siglos pasados. En sus encíclicas y documentos, sin recurrir a ninguna otra prueba, puede encontrarse todo lo que la Iglesia ha pretendido, todo lo que la Iglesia ha querido, todo lo que le ha servido de bandera de guerra, o de fundamento de exigencias en su caso.

En las encíclicas se encuentra la exposición de todas las luchas: la expresión de las teorías; la vanagloria, hasta por los acontecimientos más reprobados; la disculpa, como lo he dicho en otras ocasiones, de la Inquisición; la glorificación, más bien, de este odioso tribunal; la aseveración palmaria de la legitimidad del poder absoluto y universal de la Iglesia — me parece que hablando a senadores ilustrados no tengo otra necesidad que la de enumerar las proposiciones, siéndoles fácil encontrar en los documentos los párrafos que atestiguan la verdad de mis palabras —; la pretensión de sujetar a todas las naciones a la autoridad de la Iglesia; la confesión de que no acepta acomodarse con el progreso humano — esto es textual, expresamente dicho en esos documentos —; la condenación de todas las conquistas civiles de todos los países; el rechazo de todas y cada una de las libertades; la execración de todo, de todo, completamente, de todo lo que constituye la base de los principios elementales de

virtud y justicia, para todos los pueblos civilizados; la negación absoluta de la ciencia; el desconocimiento de todo lo que no sea sujeción completa y ciega al Papa.

Ahí están los documentos; pueden tomarse las páginas que contienen esta enumeración y traerse después las encíclicas y todos los demás documentos emanados de la curia en tiempo de Pío IX y señalarse el punto, la parte de cada uno de los documentos correspondientes a cada párrafo de mi exposición.

Ahí está el *Syllabus*, por fin, que parece que fuera un documento escrito en un momento de locura, teniendo por delante todas las constituciones de todos los países, todos los principios que rigen al mundo político y civil, con el sólo intento de formular la condenación de cada uno y de todos en general.

El *Syllabus* es el documento del siglo, ese documento en donde puede decirse que está toda la doctrina que la Iglesia sostiene como inconvencible. ¿Y por qué todo esto? ¿Cuál es el motivo de esta exacerbación en las declaraciones de la Iglesia? ¿Por qué este Papa, que comenzó por ser liberal, se afana en juntar todos los detritus de las doctrinas más o menos relegadas al olvido en dieciocho siglos, para ponerlas, enumeradas, con su índice correspondiente, y hacer de ellas una especie de testamento de su papado? Hay una razón.

La Iglesia nació pobre; continuó su camino; adquirió riquezas y preponderancia; le vinieron épocas aciagas; estuvo a punto de caer; se levantó en la edad media; volvió a perder su prestigio al fin de esta época por la noción de sus derechos, adquirida por los Estados; entra la edad moderna; en esta edad continuaron los Estados sus gestiones contra el poder espiritual; la Iglesia tiene todavía sus momentos de preponderancia. Llegamos a la época actual y nos encontramos con lo siguiente; todos los pueblos ilustrados, todas las naciones con elementos de fuerza y de doctrina, es decir, con aptitudes para triunfar en la discusión y en la lucha material y, por consiguiente, la Iglesia romana con muy pocos medios a su alcance, con elementos gastados, o sin más recursos que los que le sirvieron durante siglos para gestionar pleitos: la Inquisición, ya impotente, la excomunión y la tradición de sus ambiciones. Por esto, en los últimos tiempos, viene a encontrarse, ¿en qué situación el papado? Limitado a Roma. Ahora limitado a una casa de Roma, y teniendo en frente como murallas insalvables, las declaraciones de todas las cons-

tituciones de todos los países civilizados de la tierra.

Como opositores: elementos poderosos de acción, en doctrinas y en derechos positivos. En una palabra, señor presidente, tenemos a la Iglesia católica en la más absoluta y completa impotencia.

La prueba de que esto es así, puede encontrarse, señor presidente, en el hecho mismo de la exageración de sus doctrinas. Un poder fuerte, un poder enérgico, un poder que tiene grandes elementos para hacer triunfar sus ideas, jamás recurre a la exageración provocadora, a la exageración beligerante con que acomete la Iglesia católica.

El mundo entero le dice: «Libertad de conciencia.» El Papa responde: «Rechazo completamente el progreso.» Los gobiernos temporales le dicen: «Libertad de cultos.» La Curia romana responde: «Infalibilidad del Papa.» Y, en cada caso y ante cada verdad que no puede negarse en ninguna parte, responde la Iglesia católica con una aseveración verdaderamente irritante que hiere hasta las leyes más fundamentales del sentido común. Esa es la causa por la cual se encuentra la Iglesia católica enfrente de los estados con sus armas completamente gastadas.

No nos extrañen, pues, estas declaraciones; no hay porque tomarlas demasiado en cuenta.

Se saben cuales son las evoluciones de todas las instituciones humanas, su modo de nacer, su modo de desenvolverse y de fenecer. Todo tiene su vida, hasta los elementos químicos.

Así, las naciones, lo mismo que los individuos, tienen su modo de nacer, su modo de desarrollarse y su modo de morir; y las religiones, como todo, tienen también su cuna, su virilidad, su decadencia y su muerte. (*Aplausos*).

Pero, preguntábanos un señor: ¿por qué los Estados civiles no contestan nada ante el *Syllabus*? ¿Por qué un Estado, al cual se le niega los principios fundamentales de su Constitución, se contenta con alzarse de hombros y decir simplemente: no tienen circulación en mi territorio estos documentos emanados del Papa, en que se niega todos los fundamentos de la legislación nacional? ¿Por qué? Porque les parece mejor no hacer nada que contestar a semejante demencias, que, por su naturaleza, están fuera de toda discusión.

Yo digo esto, señor, no como miembro de una escuela de filosofía positiva: lo digo como miembro de un Estado libre; lo digo como argentino, que no puedo admitir ni tolerar que haya fuera de la patria entidad alguna temporal que se sobreponga a la patria; lo digo por-

que no puedo admitir más soberanía que la del pueblo, ni más legislatura que el Congreso; porque no puedo permitir ni aceptar como verdadera la teoría en la cual se basa a pretensión de que un poder, una entidad — no sé como llamarlo — extraña completamente al territorio y extraña a las funciones de gobierno, desde una casa lejana, situado en un pueblo, en el cual ni siquiera tiene el dominio del territorio, mande en la República Argentina; no puedo admitir que no teniendo nada cerca de esa entidad extraña, ni siquiera un representante, ni siquiera un delegado, ni medio alguno de hacer oír jamás la voz de la República, para manifestar cuáles son sus intereses, no puedo admitir, digo, que suframos de ese poder el veto de nuestras leyes, la contradicción de nuestros principios. Por eso es que no acepto esa imposición. (*Aplausos*).

Pero, se nos dice, señor: la teoría del dominio de la Iglesia está fundada en que los principios que proclama son los principios de Dios, las leyes de Dios. Nuestro obispo nos ha dicho: es porque la Nación se ha declarado súbdita de Dios; y, por lo tanto, es súbdita del Papa; de lo cual se deduce que el Papa es Dios.

Pero, en primer lugar, el Papa no es Dios; en segundo lugar, en ninguna circunstancia ninguna nación se ha declarado súbdita del Papa. Las naciones no tienen más medios de declaración, como se ha dicho, que sus convenciones y sus congresos, y yo recorro todos los documentos emanados de los gobiernos, del Poder Ejecutivo, del Congreso y de las convenciones, que han dado o reformado las constituciones, y no encuentro en parte alguna ninguna disposición en virtud de la cual se pueda someter una disposición legítimamente emanada de autoridad competente al beneplácito del Papa.

Sr. Pizarro. — Si me permite lo haré una observación.

Sr. Ministro del Interior. — Tendría mucho gusto de oír la observación del señor senador, pero creo que la discusión, hasta este momento, ha seguido un plan que es muy conveniente.

Sr. Pizarro. — No lo alteraré.

Sr. Ministro del Interior. — Ya sabe el señor senador que no es por mí que lo hago, porque a mí las interrupciones me sirven de descanso; pero me parece mejor para la unidad del debate que no se produzcan, hasta en beneficio mismo de los oradores que me han de seguir en el uso de la palabra.

A mí también se me ocurren a cada momento ocasiones de interrumpir; pero no cedo a

esa sugestión porque se conserve la unidad del raciocinio.

Sr. Pizarro. — Perfectamente.

Sr. Ministro del Interior. — Estas teorías de que las leyes que se invocan son leyes de Dios, no son subsistentes. Ello está confirmado hasta por los mismos que las sostienen, puesto que ellos aseguran que nada sucede en el mundo sino con la voluntad de Dios; y no sé cómo puede acomodarse el hecho de que haya necesidad de luchas, de batallas para sostener los principios que ellos llaman leyes de Dios, con el de que esas leyes sean contrarrestadas y no tengan sanción ni aplicación.

Yo no puedo creer, señor presidente, que por el hecho enteramente casual que determina la suerte de los hombres, que le hace elegir una ocupación o una clase de trabajo, un modo de ganar la vida, se venga a producir una división en la categoría y en la esencia de sus pensamiento. No creo que porque un hombre accidentalmente sea comerciante, abogado, médico, filósofo, y otro sea sacerdote, las ideas del primero, por tener una profesión liberal, hayan de ser pecados, y las ideas del segundo, por haber elegido la carrera sacerdotal, sean ideas de Dios; aun cuando en el primer caso se trate de un hombre bueno, virtuoso y honrado, y en el segundo de un bandido criminal.

No son, pues, esas las leyes de Dios.

Las leyes de Dios son estas: las que rigen el mundo moral y material. Las leyes de Dios son las que determinan la atracción de la materia; el movimiento de los astros; la germinación de las semillas; el desenvolvimiento de las sociedades; la formación del cerebro de los animales; las condiciones de función de este cerebro; todos los elementos de desenvolvimiento del pensamiento humano; la aplicación del pensamiento del progreso de las sociedades; y, por fin, todo aquello que es inherente a los seres, inseparable de las cosas, porque ningún objeto existe antes de tener sus leyes. Nada existe sin su modo de existir: el modo de ser es la ley. Es inconcebible que un sujeto, una entidad, algo, exista, y después un poder extraño venga y le imponga el modo de existir y le incruste la ley de su existencia.

El plomo tiene su peso, su color, su calórico específico. No ha existido como plomo, es decir, pesando, teniendo maleabilidad, color, o fusibilidad antes de tener estas cualidades; no ha existido como objeto preparado para que un poder extraño le venga a poner la calidad de pesar, de doblarse, de fundirse a tal temperatura, etcétera.

No: la ley natural está en las cosas, y, en tratándose de pueblos, es la ley natural la que preside a su desenvolvimiento; y, por lo tanto, es la ley de Dios que hace que todos los progresos humanos se verifiquen, ella la que hace que se obtenga una conquista en el orden social, como la ley del matrimonio civil, para que todos los habitantes del mundo puedan venir a la República Argentina, o ir a otro país donde se haya dictado, y formar una familia. Esas son leyes de Dios. (*Aplausos*)

Quiero decir aun algo más, señor presidente, para demostrar la verdad de las pretensiones del dominio de la Iglesia y apuntar algunos hechos.

La curia romana, como se ha dicho, se atribuye la facultad de dictar leyes a todas las naciones.

Voy a probarlo.

Para esto no tiene más que declararlas subditas de su poder espiritual; pero en ninguna época, ningún Estado ha aceptado esta doctrina ni ha sancionado semejante pretensión. Por eso vemos en todas las épocas, en las relaciones del poder temporal con el poder espiritual, la negativa del primero a que circulen las leyes y disposiciones de la Iglesia sin su beneplácito.

Ahí está el *placet* que ha levantado y levanta protestas; ahí está el *placet* que ha tenido la facultad de sublevar a los obispos; ahí están hasta los mismos concordatos, que han hecho ver y palpar que no es una cosa enteramente llana, esto de introducir doctrinas y poner en vigencia leyes de un poder extraño en los Estados, sin beneplácito del soberano. Pero esto es elemental; no necesito insistir sobre ello.

Las leyes que se tienen como leyes canónicas o divinas, no han regido para los Estados sino cuando los Estados las han aceptado.

Yo he dicho, con motivo del Concilio de Trento: no son leyes del Estado por ser canónicas, sino por ser leyes del Estado, por ser leyes civiles, porque la soberanía del Estado les ha acordado el pase, porque ha admitido que se predique sobre ellas y se enseñe la doctrina que las sustenta.

Entonces, es completamente insubsistente esta pretensión de legislar en todas las naciones.

Preguntaremos, poniendo aun con más claridad la cuestión. ¿Qué nación ha dejado jamás que se someta la revisión de sus leyes al Papa?

¿Qué convención constituyente ha suspendido sus sanciones para esperar la opinión del Papa, del poder de la Iglesia o de los prelados siquiera, antes de sentar doctrina o no?

Muéstreseme un solo hecho y entonces lo aceptaré como legítimo, puesto que él emanaría de un convenio entre el poder espiritual y el poder temporal; aceptaré como legítimo que en aquellas naciones en que tales ideas hayan prevalecido, las leyes dependen del veto, de la sanción, del consentimiento de la Iglesia.

La teoría contraria es la verdadera, señor presidente. El soberano es el pueblo; lo que el pueblo hace, sólo el pueblo lo deshace. El pueblo tiene sus representantes; estos representantes están en el Congreso; el Congreso legisla en nombre del pueblo; es, por una ficción legal, el pueblo mismo quien legisla y ningún otro poder, ningún jefe de Estado, por fuerte, por poderoso que sea, ni ningún poder espiritual puede derogar lo que hace el pueblo soberano.

Señor, la soberanía ¿es una verdad o es una falsedad?

Yo no quiero entrar en esto: esa es una cuestión filosófica y política. Lo cierto es que para la constitución de todos los países libres el pueblo es soberano. Esa es la verdad de que se parte; y si el pueblo es soberano para todas las naciones cultas y civilizadas de la tierra y si toda soberanía excluye forzosamente otra, el papa no tiene que ver en la legislación que el pueblo de un Estado se dé.

No se diga, señor presidente, que sólo se trata de lo espiritual, que estas pretensiones de la Iglesia no van más allá y que sólo afectan la doctrina; ya se sabe con qué facilidad se pasa de la doctrina a lo temporal.

Pero yo voy a mostrar, en una rapidísima enumeración, cómo las pretensiones de la Iglesia no se limitan a lo espiritual. Su objetivo es dirigir y dominar lo temporal y lo civil. En el derecho al trabajo, ¿cómo? Por la imposición de las fiestas.

En el Registro Civil, ¿cómo? Por la pretensión de los curas párrocos de conservar el registro con carácter eclesiástico, en sus manos.

En la renta pública, ¿cómo? Por la excepción que se quiere hacer en favor de los sacerdotes, para librarlos de las cargas públicas, que deben pesar por igual sobre todos los ciudadanos de un país.

En la contribución de sangre, ¿cómo? Substrayendo a los sacerdotes del servicio militar, no haciéndoles pertenecer a la guardia nacional, no poniéndoles las armas en las manos, aunque haya entre ellos millares de hombres aptos para el servicio, como sucede en Italia y España, y aunque peligre la patria y dependa

su salvación del número de sus soldados. Esto es bien temporal.

En la instrucción pública, ¿cómo? No necesito recordarlo: oponiéndose a que se contraten maestros idóneos, porque son protestantes; oponiéndose a que se profesen en la escuela y fuera de ella, o en las universidades, teorías contrarias a las admitidas por la Iglesia.

En la publicación de libros, ¿cómo? Colocando el *Index* entre las leyes indispensables para una nación; oponiéndose a la libertad de la prensa, condenándola en los términos agrios con que lo hacía Pío IX.

Ni siquiera la alimentación, como lo dice Laurent, que es lo más temporal que puede haber, escapa a la legislación de la Iglesia, pues ella prescribe en ciertos días el ayuno.

Señor: el ataque es contra todos y cada uno de los actos del hombre, del ciudadano, es contra el hecho de nacer y el hecho de morir; es, en fin, contra todo aquello sin lo cual la vida de las sociedades es imposible.

Niéguese cualquiera de estos puntos que he señalado. Niéguese, por ejemplo, que se substraiga a la renta una gruesa partida, permitiendo que los sacerdotes no contribuyan al sostén del Estado.

Niéguese que se debilita y disminuye el poder de la defensa nacional, substrayendo un número considerable de hombres, vigorosos y fuertes, cuya fuerza y coraje ellos mismos se encargan de demostrar hasta con crímenes.

He dicho que iba a señalar algunos hechos y son éstos:

La expulsión de los jesuitas de España produjo un reclamo del papa en tiempos de Carlos III. El papa quería inmiscuirse en los asuntos del Estado. La ley, o el decreto que hacía oficio de ley en aquella época, tomaba medidas contra los jesuitas. Las medidas eran de carácter temporal; pero el papa hizo una amonestación agria que obligó al rey Carlos III a reunir una comisión de teólogos y de jurisconsultos para resolver el caso. La reunión tuvo lugar y produjo un documento notable, muy conocido de todos los que tienen siquiera un barniz de historia. Este documento establecía que el papa no tenía derecho alguno de inmiscuirse en asuntos temporales; que la ley, o el decreto, estaba perfectamente dado; que los términos en los cuales se había dirigido el Sumo Pontífice a Carlos III eran descortesés y debían ser rechazados; que constituían una ofensa a este monarca, que era el ornamento de su patria y de su siglo. ¡Y esto sucedía en la católica España!

En Francia, durante el reinado de Luis XIV,

con motivo de cuestiones de soberanía temporal, una asamblea de arzobispos, obispos y prelados, en fin, compuesta con todo el clero de Francia, hizo esta declaración, redactada y defendida por monseñor Bossuet en 1662 en la Asamblea: «Declaramos que los reyes y soberanos, no están sometidos a ninguna potencia eclesiástica por orden de Dios, en las cuestiones temporales; que no pueden ser depuestos directa ni indirectamente por la autoridad de los papas ni de la Iglesia; que sus súbditos no pueden ser dispensados de la sumisión y de la obediencia que les deben, o absueltos del juramento de fidelidad; y que estas doctrinas, necesarias para la tranquilidad pública, no menos ventajosas para la Iglesia que para el Estado, deben ser infaliblemente seguidas como conformes a la palabra de Dios, a la tradición de los santos padres y a los ejemplos de los santos; que, aunque el papa tenga la principal parte en las cuestiones de fe y que sus derechos afecten a todas las iglesias y a cada iglesia en particular, su juicio no es sin embargo irreformable — aquí encontramos negada la infalibilidad del papa — a menos que intervenga el consentimiento de la Iglesia.»

Se publicó en edicto este documento, dándole fuerza de ley, y se prohibió todo cuanto le fuera contrario.

Otro ejemplo. El Parlamento italiano sancionó una ley contra las bulas: ni siquiera prohibió que fueran introducidas en el territorio para que se legislaba: se limitó la ley a quitarles autoridad, es decir, a impedir al pueblo que creyera que estaba obligado a cumplir lo que decían aquellas bulas. Esto hizo el Congreso sin usar del derecho de prohibición, o admisión que se llama *placet*. Con este motivo se produjeron protestas de los obispos y del clero; éstas fueron acatadas y aprobadas por el papa, y fué rechazada también la ley a que me refiero.

En Suiza, en 1850, prohibió el gobierno publicar las bulas sin que tuvieran el consentimiento del soberano. Sucedió exactamente lo mismo. El papa quiso poner su veto a la ley; se hizo una protesta general en el clero, con recurso, naturalmente, al papa. Y ya tenemos en el gobierno de Italia y en el gobierno de Suiza al papa vetando las leyes que dictan los dos estados.

En Piamonte, con motivo de las leyes de Siccardi, de este célebre jurisconsulto y creo que ministro de instrucción pública en aquel tiempo, ocurren hechos más graves y más patentes todavía. Estas leyes sometían a los clérigos a la jurisdicción civil; prohibían dar asilo

en las iglesias a los asesinos; abolían los diezmos; destinaban a la instrucción pública los bienes dados a los jesuitas para la enseñanza; permitían a los primos casarse, sin estar obligados a pagar un derecho a la Iglesia. El papa Pío IX hace nuevas amonestaciones con motivo de estas leyes; niega el derecho con que son dictadas; las declara nulas y sin ningún valor. Las leyes son puestas en vigencia, a pesar de esto. Un señor Santa Rosa, que creo era ministro también, muere: había tomado participación en la formación de estas leyes, las había aprobado. La Iglesia le niega su asistencia en los últimos momentos y después de su muerte. Con este motivo hubo movimientos favorables de parte de los laicos y rechazo por parte de los clericales. En fin, el resultado de esto fué que la ley siciliana que, como se ve, sostenía los mejores principios, aquellos que ningún ciudadano puede rechazar, quedó vigente y que el papa continuó anulando y derogando esas leyes; es claro que las derogaba en teoría y que concluyó por excomulgar a todos los que de cerca o de lejos tuvieron participación en ellas, a todos los que las observaban, a todos los que las hacían observar, y poco a poco, ensanchándose el círculo de los complicados, quedó excomulgada toda Italia, porque todos habían aceptado las leyes condenadas.

En España se declara la libertad de cultos y se ordena la venta de los bienes de los religiosos. El papa no pierde su costumbre: deroga las leyes dictadas. Es claro que las deroga, como siempre, en teoría; pero con cierto efecto esta vez, porque se trata de un pueblo eminentemente católico, tan católico, que el mismo Laurent se ve obligado a decir que entristece el contemplar la situación de este pueblo, que fué orgullo de las naciones y cuyo poder fué inmenso, pueblo que rompe sus cadenas un momento y las vuelve a tomar para ponérselas en las manos y en los pies.

Sin embargo, España lucha por sacudir la dominación del papa y según tengo entendido ahora mismo negocia con la curia romana algún acomodo para implantar su legislación civil en materias disputadas por la Iglesia.

Ya se ve, señor presidente, que en toda Europa el papa se atribuye el derecho de derogar las leyes, como lo acabo de hacer notar, cuando las considera contrarias a la Iglesia.

En Nueva Granada se sanciona una ley aboliendo los diezmos; Pío IX anula la ley.

En Méjico dispone una ley de los bienes de los jesuitas; el papa veta la ley.

Tenemos otras dos naciones en el índice: Nueva Granada y Méjico.

En la misma Nueva Granada se dictó una ley de matrimonio civil; Pío IX la anula.

La misma nación se permite, poco tiempo después, asegurar para los inmigrantes la libertad de conciencia. El papa deroga la ley y produce documentos en contra de ella, instigando a los católicos a desobedecerla.

En Bélgica una ley dispone de los fondos de una institución, ley que fué necesaria, porque lo que se llamaba fundaciones — que los señores abogados deben saber lo que era — en manos de los sacerdotes se convertían en todo menos en aquello para lo cual los fundadores lo habían destinado. Un cura, por ejemplo, dispone de una fundación, la vende y da el dinero a su sobrina. Esto era manifiestamente un robo. Pues, contra esta ley tan legítima y que tenía un origen tan sagrado, se levantó también el clero en Bélgica y el papa aprobó la conducta de los sacerdotes.

Se pregunta uno, después de estos hechos, señor presidente: ¿cuál es la causa por que el poder espiritual quiere tomar parte en la legislación de todos los países? ¿Por qué sucedió esto en España y por qué esto sucedió principalmente en Italia?

La respuesta es dada por todos los historiadores que tratan la materia. En Italia: porque siendo el asiento del papado desde siglos y siglos y estando el pueblo acostumbrado a obedecer al Sumo Pontífice y a hacer que sus decisiones se respeten y se cumplan, aunque importen un abuso contra el gobierno, la autoridad del papa tiene probabilidades de éxito. En España, por causas análogas.

Pero el papa no se atreve a derogar las leyes de Francia; no dice nada respecto a las leyes de Inglaterra; no anula las leyes de Alemania. No, señor presidente; aquí se trata de fuertes potencias cuyo pueblo no es tan sumiso. Guarda sus excomuniones y la aplicación de sus teorías y de sus doctrinas para los países chicos, para aquellos en donde cree que puede hacerse obedecer con facilidad, por la índole y la fe de las mayorías.

En América, ¿por qué será? ¿Será porque se cree en la curia romana que disponiendo ya de la madre patria, como se dispone de España, es muy natural disponer de los herederos o de los hijos? Porque no puedo creer que sea por desdén, ya que América no tiene representantes en el seno del gobierno espiritual del papa.

Hemos visto, pues, señor presidente, que el poder espiritual no se detiene ni ante la obligación de mantener leyes que faciliten la acción de la justicia en los pueblos; hemos visto que sostiene el derecho de asilo, que no es más

que la facilidad de librar a los criminales de la acción de la justicia temporal; hemos visto que sostiene las fundaciones, que en manos de los sacerdotes se convertían, como he dicho antes, en ocasión de despojos y de robos; hemos visto que sostiene los diezmos, es decir, que se atribuye el derecho de imponer contribuciones, substituyéndose al Estado, obteniendo tributos de parte de los ciudadanos que no son debidos sino al poder que los recauda, para sostén de la Nación.

Pero falta todavía algo, que es más notable.

Todo lo que dejo dicho puede calcularse que ha sido hecho para mantener el poder de la Iglesia, necesitando de este poder para los fines espirituales.

Podemos calcular que eso se disculpa, que hay en ello algo de política; pero en lo que no hay nada, absolutamente nada de política y sí mucho de inhumano y de increíble, es en lo que voy a narrar.

Pasen los diezmos, pase el asilo en las iglesias, pasen las fundaciones y tantas otras cosas; pero hay algo más sagrado todavía, porque se trata de lo más íntimo, señor presidente: la familia.

Voy a referir con toda la frialdad que pueda un hecho ocurrido en 1858 y que muestra el carácter de esta institución que se llama Iglesia católica, y la energía, la vivacidad y la persistencia con que las pretensiones de esta Iglesia van adelante en su camino.

Había bajo la jurisdicción del papa, en 1858, una familia de judíos. En esta familia había un niño de 7 años, y la familia tenía a su servicio una mujer católica. Un día a ésta le pareció que el niño estaba muy enfermo y lo bautizó. El hecho se puso en conocimiento de la autoridad eclesiástica y en nombre del papa agentes del orden público, o del desorden público, se presentaron en la casa judía y, a pesar de los llantos de la criatura, a pesar de sus esfuerzos — en el libro que he leído está descripta perfectamente la escena horrible en la cual los agentes del papa arrancan a este niño de los brazos de la madre — a pesar de toda esa escena que bastaría para conmover a cualquier tirano de la tierra, el niño fué sacado de su casa y arrebatado a su familia y conducido a un instituto. Todavía, señor presidente, a este hecho terrible, desdoloroso, se añade la burla, porque en la versión que se hace del suceso por los clericales, se sostiene que el niño, si bien estaba desesperado cuando se le separaba de su madre y estiraba los brazos hacia ella, cambió de fisonomía, dejó de llorar, brillaron sus ojos de alegría y no se acordó más de su familia,

desde el momento que le dijeron: «la santa Iglesia es vuestra madre y os recibe en su seno.» (*Aplausos*).

Señor presidente: cuando un poder va hasta atentar a lo más sagrado que hay en la tierra, a cortar los vínculos más estrechos y más naturales: los que unen a la madre con el hijo ¿qué se puede esperar de él?

Toda Europa se levantó contra el atentado, no en armas, pero sí con la opinión y con la prensa. Comenzaron las sectas judías a agitarse; los banqueros israelitas pusieron su dinero al servicio de los que condenaban este hecho, inaudito en el siglo en que vivimos. Después, toda la prensa judía y la no judía, la prensa de todas las naciones, levantó también su voz: toda Europa condenó el crimen de lesa naturaleza.

El papa estaba apoyado en aquella época por el gobierno francés, porque, según se ve, no bastaba el poder de las excomuniones ni de las bulas para sostener la autoridad: eran necesario batallones y regimientos extranjeros. Napoleón, con muy buenas razones, se dirigió al papa mostrándole la monstruosidad de su conducta, que sublevaba la conciencia de todo el mundo, la conciencia de los mismos católicos. El papa no hizo caso, contestó *non possumus*, a pesar de esa importancia de la persona que se dirigía a él para hacerle tan sensatas amonestaciones.

El niño... no sé la suerte que corrió; pero, por de pronto, no volvió al seno de su familia.

Para disculpar tan inaudito abuso, la curia sostenía esta teoría: «la Iglesia católica, por el hecho de bautizar a un niño, aun contra la voluntad de sus padres, se substituye a la familia, es la madre, y con más derecho que aquel que la naturaleza y las leyes todas del mundo dan a los padres, se apodera de los hijos arrancándolos por la fuerza del hogar, porque el bautismo es superior a la naturaleza y a la ley civil».

¿Puede tolerarse la existencia de un agente en el mundo que ejerza semejante autoridad en la familia, semejante autoridad de trastorno, puesto que este hecho es contrario a todo lo que sancionan las leyes en que se halla cimentado el orden social?

Pues eso ha sucedido en 1858, señor presidente, con la reprobación universal, con la reprobación de todas las conciencias, y creo que con la reprobación de todos los que me oyen, porque no se puede admitir que, so pretexto de un bautismo, se arrebatase un niño de los brazos de la madre, para substraerlo a su autoridad y a sus cuidados.

En Francia, el terrible Veuillot, más querido para el papa todavía que los mismos ministros de la Iglesia, puesto que él lo sostiene en sus polémicas ardientes, envenenadas, enojosas, aun contra el clero, aunque ese clero esté representado por el respetable obispo de París, Veuillot, aparte de los demás escritores clericales que al principio habían abordado tímidamente el caso y no querían tratarlo por tener todas las desventajas, Veuillot, poco a poco, fué hasta hacerse incendiario en la defensa de la agresión pontifical: la Iglesia, según él, estaba en su derecho al quitar a una madre su hijo.

Así quedaron las teorías santificadas en la curia y sancionadas en la prensa ultramontana.

Pero, señor, no es el bautismo, ni la confirmación, ni la extremaunción, ni las bulas, ni los diezmos, ni el voto, ni las fundaciones, ni nada de esto, lo que más inquieta a la Iglesia católica; es la cuestión del matrimonio.

Pero ¿por qué? Porque es un instrumento de dominio.

Quiere tener intervención en el matrimonio, no sólo porque se trata de la formación de la familia, sino por todo lo que está al rededor de este contrato el más trascendental en la sociedad; quiere confesar a la novia, tener el secreto de la virgen, las confidencias de la esposa, la autoridad sobre la madre, y por ella, sobre la familia, y por ente el conocimiento de todo lo que pasa en la casa y el imperio sobre el marido, a quien se le deja gotear todas las noches y todos los días una palabra en favor del sacerdocio y de la Iglesia y de las ventajas de todo ello... (*aplausos*) y por lo tanto el dominio de la sociedad, porque ese matrimonio va a tener hijos, esos hijos es necesario que desde el principio caigan bajo la potestad de la Iglesia, con el consentimiento de los padres, para no tener que recurrir a una sirvienta extraña que bautice a los hijos de los judíos, aun que sea por distracción; esos hijos es necesario que vayan a la escuela primero, que aprendan la religión, y que vayan en seguida al colegio de jesuitas; y todo esto lo determinan las madres, porque el padre anda en la calle buscando su trabajo; tratando de adquirir lo necesario para la vida, mientras que la madre está en la casa ocupada de los niños.

Ahí tienen, señores, esta admirable organización, que cualquiera de nosotros pondría en práctica, si tuviera las mismas creencias. En muchas circunstancias de la vida, siendo ésta tan dura, desearíamos tener la suerte de los directores de la Iglesia.

Ahí tiene señor el motivo por el cual, cada

vez que se trata de suprimir la intervención de la Iglesia, en lo relativo al matrimonio, para darla o volverla al Estado, se levanta una polvareda inmensa en las falanges clericales.

No es lo que se deje de pagar a la curia; eso es insignificante; los católicos continuarán pagando cuanto se les pida.

Lo grave para ellos es que toda esta máquina, terrible en sus efectos, se viene al suelo con quitarles la facultad de entender en lo referente a los matrimonios y de determinar cómo se han de hacer: sobre todo de retirar de la jurisdicción eclesiástica los litigios de los esposos, para impedir que los jueces de la curia den sentencias escandalosas, como las que hemos presenciado, en que se condena a una mujer por adulterio, no obstante que todos los médicos e infinidad de personas honorables, declaran que aquella mujer acusada y condenada tan infamante, es virgen (*Aplausos*). El hecho ha pasado en Buenos Aires, ahí anda un folleto que, todos han leído; no hago más que repetir parte de lo que él dice.

Es, pues, una organización completa, a la que obedecen los directores de la Iglesia. Y tienen muchísima razón en oponerse a que salga de sus manos todo lo que se refiere al matrimonio.

Pero, no se comprende que haya una organización sin organizadores, que haya una persistencia tal de doctrinas sin que el poder director sea permanente, sin que haya una entidad duradera que venga desde siglos atrás sujeta a las mismas reglas, a las mismas teorías.

Indudablemente, señor presidente, la Iglesia tiene sus directores; estos directores no han cambiado desde largo tiempo y continúan en su puesto en la actualidad; los principios de estos doctores son los de dominio universal. La tradición muestra esta tendencia desde los primeros tiempos en que se organizó la comunión que ha tomado a su cargo la dirección de la Iglesia.

Sus medios de acción, entre otros, son los siguientes: la afirmación de sus aforismos, testaruda, insistente, indomable, que no se sujeta a la razón, que es vencida en una parte y aparece en otra con la misma tenacidad. Los miembros de este partido director son sutiles, son hábiles, tienen sus grandes conexiones con la sociedad, las familias poderosas y ricas les consultan; tienen una educación a propósito para influir en el seno de los grupos aristocráticos; son cultos, melosos, artificiosos y maleables; cuando discuten reprueban de una manera de-

licada la opinión contraria; rodean para vencer al enemigo.

Su propósito, con relación al papado, ha sido, desde siglos atrás, dominarlo. Mil veces han ido a la carga y han salido desesperados.

En los últimos tiempos han conseguido su objeto, porque uno de los elementos, quizá el principal de su doctrina, es la tenacidad, la insistencia. Y cuando hay una organización para insistir y persistir con tenacidad durante siglos, es muy difícil que no se consiga lo que se desea.

Los medios con que este poder actúa en la sociedad son la mujer y el niño. En su sistema hay parte de cobardía y parte de habilidad. La parte de cobardía consiste en que se ataca al débil, lo que no es permitido; la parte de habilidad, en que se comienza por lo más fácil, y así se asegura el éxito.

La inteligencia de la mujer no está organizada para resistir; las mujeres prefieren creer, la intensidad de sus facultades no es poderosa.

Señor presidente: no hay hasta ahora una sola mujer que haya producido una obra maestra. Ellas no son siquiera superiores a los hombres en la producción de obras de arte, cuando parece que, por su naturaleza delicada, estaría el arte más al alcance de su talento. No han hecho un cuadro que sea más célebre que los que han pintado los hombres; no han hecho una ópera, una pieza de música; no han hecho tampoco una escultura. Las mujeres no han hecho ningún trabajo serio de legislación; no han descubierto ningún principio; no hay una sola de ellas que sepa matemáticas; y más: hasta en los juegos que necesitan una gran persistencia intelectual, no han sido sobresalientes: la mejor jugadora de ajedrez, juega menos bien que un jugador mediocre.

Esto no es un ataque a la mujer; es una descripción la que hago. Les falta una calidad eminente, y es la persistencia; y no se llega en ciencia, ni arte, ni en política, ni en nada, a ser eximio, sino a condición de persistir.

Por lo tanto, ahí tienen los directores de la Iglesia católica un cerebro muy preparado para acatar todos los sermones y para dejarse asombrar con todas las patrañas, según decía mi colega el doctor Posse.

Los niños prefieren también hacer lo que les dicen. Ellos obedecen; no ratiocinan; basta que el que los dirige sea simpático o temible.

Las mujeres y los niños son dos elementos modelables, dos juguetes en manos de los directores de la Iglesia, y se sabe cuánto el amor paternal facilita la influencia del hijo sobre el

padre, y cuan grande es el influjo de la mujer sobre el hombre.

Aquí tienen explicada la habilidad, que yo aplaudo naturalmente, de los directores de la Iglesia para apoderarse de la sociedad. Felizmente hay hombres fríos y mujeres racionales, que no influyen en las decisiones de los padres, de los esposos y de los hermanos, quedando estos en libertad de legislar, independientes de las protestas de las esposas que pueden firmar mil peticiones en las iglesias, pero que dentro de su casa no piensan sobre la conciencia del marido.

Señor ¿cómo se llama este partido? Este partido tiene un nombre dentro de la Iglesia y otro nombre fuera.

Afuera sus afiliados se llaman «los católicos». Estos son los que tienen todas las cargas: contribuyen con su dinero a todo; ellos son los que se cotizan para mantener los colegios, los conventos, los monasterios y demás; no tienen ninguna ventaja, sino la de ser salvados y que la Iglesia ruegue por ellos; tienen asegurada la vida eterna, pero en esta no reciben ninguna compensación; son ellos los que salen con su prensa a combatir contra los liberales; son ellos los que soportan las cargas y todas las molestias de la lucha. Estos son los «católicos, los ultramontanos.»

Dentro de la Iglesia ¿cómo se llama este partido? Se llama «jesuita». Este partido jesuita, habilísimo director de las conciencias en todas partes; al que se le tapa una cueva en Europa y la abren en América; se la tapan en América y la abren en Oceanía; se la tapan en Oceanía y la abren en la otra parte de la tierra: este partido poderoso es el que tiene ahora la dirección de la Iglesia. (*Aplausos*).

Señor presidente: me acuerdo que el doctor Larroque, hombre digno, se educó entre jesuitas. Creo que tenía también estudios para sacerdote. Iba a ser sacerdote. Tenía la preparación necesaria para aquella estimación natural que tenemos a los que han sido nuestros maestros, esa gratitud tan benéfica y tan digna de encomio. Era liberal por principios, pero tenía su mezcla de religioso y aun de clerical. Y, sobre todo, le sucedía a él lo que al doctor Avellaneda: que sabía perfectamente la ciencia laica, pero conservaba sus recuerdos de provincia, la impresión que le habían hecho los monasterios, los conventos en su niñez; se representaba lo sombrío de aquellos templos y alguna idea mística le dominada al abordar estas cuestiones, que él sabía que eran verdade-

ras, pero que no quería tocar. Lo mismo le sucedía al doctor Larroque.

¡Qué admiración por los jesuitas!

Y me acuerdo que, refiriéndose al dominio que ejercían, nos decía en el colegio, en una lección: «pero, cómo no han de ser directores de las conciencias del mundo, si son los hombres más hábiles e instruidos! El que se pone a estudiar matemáticas, estudia matemáticas toda la vida; el que se pone a estudiar física, estudio física siempre; el que estudia astronomía, no estudia otra cosa jamás. De modo que siempre se encuentra en los colegios de los jesuitas una colección de los hombres más científicos».

El dominio de la ciencia indudablemente no puede ser rechazado; pero la ciencia de los jesuitas tenía un defecto: estar al servicio de un propósito, inconfesable, no ya oculto hoy, felizmente, porque son conocidas sus tendencias su constitución, sus reglas y manifiestos, sus medios de acción en el mundo: aparte de esto los padres de la Iglesia, los jesuitas, confiados en su inmenso poder y en su erudición, han ido descuidando poco a poco la ciencia, y poco a poco también los laicos los han ido aventajando.

Ahora la ciencia, entre los laicos, está mucho más adelantada, como la saben todos, que entre los jesuitas y éstos vendrán a ser con el tiempo discípulos de aquéllos. Pero prescindamos del momento actual, acordémonos de lo que eran antes que la ciencia se hubiera propagado, que se hubieran hecho los grandes descubrimientos, que elevan, más que la religión, la inteligencia humana. Volvamos a tiempos relativamente lejanos y nos convenceremos de la razón por la que esta congregación ha sido tan elogiada, tan ponderada, tan eficaz, y, por fin, tan perseguida.

Una vez entraba yo a un convento con un eclesiástico —, porque, por más que parezca una paradoja, tengo muy buenos amigos eclesiásticos, — con el que solíamos hablar de artes, de ciencias y demás cosas de este mundo: y, pasando por uno de los corredores, iba un padre jesuita, pegándose contra la pared, chico, entecado, flaco, pálido, con ojos escavados. Mi acompañante señalando al padre con el dedo me dijo: — «Candidato para mártir; este va a ser santo. — Le pregunté: ¿cómo es eso? ¿Se va a hacer santo? — En la organización de los jesuitas hay de todo, me contestó; nosotros tenemos padres predicadores, profesores y misioneros. Este va a ser misionero; para mártires destinamos los tontos, porque en toda congre-

gación es necesario que haya un poco de todos los gremios». (*Risas*).

Una congregación que tiene hasta candidatos para mártires, tiene por lo tanto la colección de aptitudes necesarias para abarcar todas las ciencias, todas las artes y todas las manifestaciones de la aptitud humana!

Así se dividen y pueden tratar un asunto cualquiera: conocen perfectamente la geografía, la historia y demás; conocen admirablemente todas las cuestiones sociales, de todas las partes del mundo, mucho mejor que nosotros.

Nosotros creemos que conocemos la República Argentina, por ejemplo; no, por cierto! Nosotros creemos que conocemos la sociedad de Buenos Aires; no: cualquier jesuita la conoce mejor. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla: porque la estudia bajo el punto de vista estratégico, la estudia para atacarla.

Ellos saben, por ejemplo, a dónde es necesario mandar un grupo de jesuitas o un jesuita solo; y de repente viene del interior del Africa un individuo de la compañía, a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque tiene una calidad especial para influir sobre tal sociedad o tal familia, y ese jesuita es el más aparente para conseguir el propósito que se persigue.

Si se les dejase, llegarían a dominar el mundo y sucedería lo que no quiero que suceda: que, por no dejarnos gobernar, tendríamos que hacernos jesuitas. (*Risas*).

Pero, señor presidente, véase cómo van ganando terreno aquí, cómo ganan en todas partes. A ellos no les importa nada los éxitos parciales: lo que les importa es lo definitivo. ¿Los corren de una parte? Vuelven. ¿Los expulsan de otra parte? Vuelven. ¿Derogan sus instituciones en una nación? Se van a un paraje próximo, no se mueven, esperando que llegue el momento oportuno.

Vuelven solapadamente cuando no se piensa en ellos; aprovechan la circunstancia en que la sociedad está ocupada de otra cosa, y entonces, poco a poco, se insinúan, se hacen los pobres, los muertos. (*Risas*). ¿Los echan de España? No hacen nada por el momento, pero... volverán.

Los papas hasta aceptan que se les expulse de una nación católica, hasta aprueban ellos mismos la expulsión y reconocen la legitimidad de la medida. No importa: ya volverán a influir sobre el papa, y procurarán hacer derogar las disposiciones dictadas contra ellos, y se harán amigos y directores de él, y más que directores, centinelas de vista, que no lo dejarán mo-

ver absolutamente y le harán un círculo de hierro, una esfera de metal que no deje pasar ni la luz ni el aire; dentro de ella pondrán al papa, para que no llegue a él ninguno de los rumores de esta civilización que se va desenvolviendo, y para que crea el papa estar todavía en la edad media y poder mandar los pueblos.

Por eso resulta esta oposición tan grande entre los hechos del mundo y las declaraciones de los papas. De repente viene un documento del jefe de la iglesia, por el que parece que ignora lo que pasa en todas partes. Da ganas de despertarlo y decirle: «señor, mire que estamos en el siglo XIX, mire que los habitantes de la tierra han declarado la libertad de enseñanza, la soberanía de los pueblos, ¡despiértese!»

Los jesuitas no dejan que se haga nada de esto.

Con respecto a la propiedad de monasterios, iglesias, edificios costosos que hacen en todas partes, se quejan los jesuitas; sostienen sus derechos, y se quejan de que los gobiernos les confiscuen sus bienes.

Desde luego, nosotros, leyendo la historia, encontramos en cada época: «Confiscación de los bienes de los jesuitas en España; confiscación de los bienes de los jesuitas en Méjico; confiscación de los bienes de los jesuitas en Francia.»

Esto le obliga al lector de la historia a meditar un momento y decirse: «Pero, es imposible que todos estos gobiernos, y en épocas tan diferentes, tomen una resolución siempre igual sin motivo, y que siempre exista la iniquidad contra la cual gritan los jesuitas y protestan. La verdad es que no hay tal iniquidad.»

¿Con qué hacen las corporaciones religiosas sus templos, sus monasterios y colegios? Con el dinero del pueblo, obtenido de un modo no siempre legítimo.

Los jesuitas no trabajan; son en verdad parásitos; ninguno labra la tierra ni la hacen producir; se dedican a la enseñanza; se dedican a estas profesiones que se llaman generalmente parásitas. No sé si habrá alguna excepción, algún padre que siembre; pero, en fin, la orden no trabaja, gestiona sus asuntos ante la sociedad y recibe, en calidad de recompensa de los alumnos que educan o por otra causa, el dinero con que levantan sus edificios.

Muy bien. Viene el poder temporal, se observa que la orden va tomando demasiado incremento, y cuando ya han levantado hasta cierta altura su poder, cuando están ya sus edificios prontos para instalar en ellos su ejército conquistador, el poder civil les echa la mano encima y devuelve al pueblo lo que del pueblo salió: lo ven-

de, o lo aplica, ¿a qué? A la educación, porque han salido de la educación las sumas con que toda esa construcción fué levantada.

Y así se viene a dar la razón a la ley histórica, que nos muestra el hecho repetido por siglos y siglos, siempre en las mismas condiciones.

De modo que son los jesuitas en la política y en la sociedad lo que Sísifo era en la mitología: levantan la piedra, suben la montaña con ella, y, cuando ya van a llegar a la cima, se les cae la carga de las manos y rueda al precipicio.

Esta corporación temible, esta compañía tan hábil no persistirá. ¿Por qué? Porque le falta este elemento único, que hace imperecederas, eternas y perdurables las instituciones: el objeto loable, honrado, útil. Por grande que sea la habilidad, cuando no se tiene un propósito confesable y por objetivo lo útil, nada subsiste.

Sr. Derqui. — Podríamos pasar a cuarto intermedio, si el señor ministro está fatigado.

Sr. Ministro del Interior. — Perfectamente.

—Se pasa a cuarto intermedio. Momentos después continúa la sesión.

Sr. Presidente. — Puede seguir el señor ministro.

Sr. Ministro del Interior. — He concluído, señor, de enumerar los hechos y presentar las doctrinas que prueban mi tesis, respecto de la tendencia de la Iglesia para impedir que las naciones legislen con libertad, y voy a entrar en el asunto que tratamos: el matrimonio civil, que no ha sido tocado sino ligeramente en diversas partes de mi discurso.

Con los antecedentes que he dado, se comprende por qué se oponen los clericales en todas partes a que se dicte la ley de matrimonio civil; pero es necesario advertir, señor presidente, que esta oposición parece desmentida en varias circunstancias.

En efecto, en varias ocasiones la Iglesia ha admitido, porque no ha podido hacer menos, las formas del matrimonio civil, como va a resultar de los documentos que voy a presentar al Senado.

Nosotros tenemos derecho para dictar esta y otras leyes, y las dictaremos a pesar de todas las oposiciones.

Creo que me es permitido inducir y deducir de los hechos y de la actitud de la Cámara que esta ley será dictada. No sé cuál será la forma en que se dicte; pero la República Argentina necesita tener el matrimonio civil, y lo tendrá. Lo poco que puedo añadir respeto a las ventajas del matrimonio civil, todo ha sido dicho, todo está al alcance de cualquiera; se lee en

todas partes; cada uno está habilitado para escribir artículos y pronunciar discursos probando la necesidad del matrimonio civil.

Necesitamos reformar una ley que tiene cerca de cuatrocientos años. La sola enunciación de la época en que la ley fué dictada, hace inútil probar que esa ley no puede ser aplicada a sociedades que se desenvuelven tan poderosamente como las sociedades del siglo XIX; reglas, ritos y leyes dictadas bajo la influencia de una atmósfera tan diferente, para pueblos que tenían una educación y una civilización tan distinta de la nuestra, no nos pueden bastar.

«A priori» se puede sostener que las leyes del Concilio de Trento, relativas al matrimonio, no son aplicables a las sociedades modernas.

Lo mismo podrá decirse de otras disposiciones de ese Concilio, pero no es el caso de examinarlas.

Habría también otro punto que indicar: la necesidad de armonizar nuestra legislación. Mientras todas las demás instituciones se han reformado; mientras se han dictado leyes tomando los hechos de las sociedades actuales como base, esta ley de matrimonio ha persistido, ha sido introducida en la codificación civil de muchos pueblos; es lo único que ha quedado estático y ni siquiera completo, porque el uso ha derogado varias de sus disposiciones.

Para la misma Iglesia, muchas de las prescripciones tridentinas han caído en desuso y, además, nunca han sido aplicadas en general. ¿Por qué? Porque obedecían a causas de localidad, a causas accidentales, que no tenían carácter general. Así han sido modificadas por los obispos, y en la práctica y otras reglas sin carácter legal, han sido introducidas en las costumbres.

Yo haría un pregunta que, si fuera contestada negativamente, mostraría lo que acabo de decir. ¿La confesión es una condición indispensable para contraer matrimonio? Sin embargo, tenemos en todas partes la exigencia de la confesión, porque es necesario estar en gracia de Dios para recibir el sacramento. Yo no creo que sea una condición ineludible, impuesta por la legislación canónica. Ahí se tiene una disposición introducida por el uso, y como ésta hay varias.

Necesitamos, pues, señor presidente, revisar la ley, porque la ley civil ha puesto en vigencia la ley canónica de una manera sumamente inconsiderada, con excepciones de poca monta y omitía otras reglas que debieran ser expresadas y que fluyen de artículos puestos en otras partes del mismo código.

Necesitamos revisar la ley, para corregir las causas de oposición al matrimonio, los impedimentos dirimentes que lo anulan, lo relativo a la edad, que se considera ahora como un error sustancial de la Iglesia; señalar la edad de doce años, como una edad en la cual se encuentra la mujer en aptitud para contraer matrimonio, es una prescripción contra la naturaleza y contra los principios más elementales del gobierno de la familia; no es ni siquiera bien inspirada en el desenvolvimiento orgánico según los climas. Porque, por ejemplo, en Europa, donde se hizo aplicables las disposiciones del Concilio de Trento, las mujeres no son mujeres a los doce años; no lo son como lo sabe la Cámara, sino en los países cálidos, y, sin embargo, la Iglesia ha permitido matrimonio de las mujeres en esa tierna edad.

Yo pregunto ¿si es posible entregar a las violencias de la lujuria, tan natural y tan propia en matrimonios jóvenes, a una niña de doce años, no todavía formada; si es posible entregarle los cuidados de la maternidad, sin perjuicio para su salud, sin peligro para su vida misma? Y pregunto a todos los que tienen hijas o hermanas, o que saben lo que es una criatura de esa edad, si piensan que el desarrollo físico de una niña de doce años permite que sea madre, sin grave riesgo, y si su estado moral es compatible con sus deberes en el hogar. Para convencernos de que no es así basta recordar el estado mental de una niña de doce años. Ello se demuestra en los hechos, señor presidente. Cuando por casualidad hay matrimonio en esa edad, la salud de la mujer se agota muy pronto y su vida se acorta. Hay que pensar en las consecuencias del matrimonio: la maternidad, la lactancia, las diversas enfermedades que le pueden venir. En fin, no necesito entrar en un proceso que tendría más de exposición médica que de discurso parlamentario.

Todos están convencidos de que esto necesita reformarse, y la misma Iglesia ha admitido que los países donde hay una legislación que establece una edad mayor, como necesaria para contraer el matrimonio, debe respetarse esa decisión.

Necesitamos reformar los impedimentos relativos al parentesco, muchos de los cuales, como se sabe, no han sido sino fuente de renta para la Iglesia, puesto que se dispensan infaliblemente o con muy pocas excepciones.

También tenemos que reformar lo relativo al consentimiento y acordar el Código Civil entre sus diversos artículos. Por ejemplo, todos los señores senadores lo saben, las leyes

canónicas admiten el casamiento de los dementes en los intervalos lúcidos. La Iglesia, pues, admite los intervalos lúcidos y el Código Civil, no podría casarse un loco, aun cuando diera su consentimiento en un intervalo lúcido, y sí, por otros artículos, por los que admite la legislación de los cánones, sin hacer más excepción que la de los esponsales y la del párroco, de tal manera que, según el código, queda y no queda un loco habilitado para contraer matrimonio.

Necesitamos reformar todo lo relativo a los impedimentos que emanan de la impotencia y de la esterilidad, cosa que ni los mismos médicos pueden deslindar fácilmente; y necesitamos hacer esta reforma para poner hasta la misma Iglesia de acuerdo consigo misma. Si impide los matrimonios por impotencia o esterilidad ¿cómo permite los matrimonios en artículo de muerte y en la extrema senectud, cuando se sabe que los viejos, en la extrema senectud, son estériles e impotentes?

Necesitamos reformar lo que se refiere al impedimento de la herejía, y — no me atrevo a decir incluir, entre los impedimentos, aunque sé que ello vendrá con el tiempo — disponer que se considere siquiera como causas de oposición, que la autoridad civil deba tener en cuenta para resolver sobre la facultad de contraer el matrimonio, estos hechos que voy a mencionar.

La Iglesia y la legislación antigua sobre el matrimonio se han cuidado sobre todo ¿de qué? de la parte moral y de la parte religiosa; pero han descuidado algo que es fundamental: la parte física. Así, mientras se encuentra un gran número de impedimentos morales — y el hombre es físico y moral — no se encuentra un gran número de impedimentos o causas de oposición, por razones relativas a lo físico, y eso más bien cuando se trata de menores o individuos que viven en cierta dependencia.

Pero la ciencia médica que ha de tener también su representación en las corporaciones legislativas redactores de los códigos; la ciencia médica que va ganando poco a poco terreno, ha de hacer que veamos dentro de no mucho tiempo a estas corporaciones, con representantes de las ciencias naturales en su seno, a fin de que no olviden que el hombre tiene un cuerpo para llevar al matrimonio y que es necesario atender a su físico.

No pudiendo pretender de una manera práctica, lo pretendo ahora sólo en conciencia, porque quien sabe si obtendría la realización de mi deseo; me limito a hacer votos por que cier-

tas prescripciones indicadas por los médicos entren a formar parte de la ley.

Ya se tiene en cuenta, por ejemplo, la locura; pero no se tiene en cuenta el histerismo, que es una locura más terrible que la locura misma reconocida por las leyes.

Para probar esto me bastaría recordar los hechos que refiere la ciencia médica contemporánea relativos a la Glacer, una mujer histerica que ha revuelto toda Europa; que hizo encerrar cuatro o cinco médicos y condenar a innumerable gente, dando lugar a causas y procesos ruidosos, inventando intrigas de todo género, y, sin que hubiera nada de real en el fondo de sus maquinaciones, tuvo con todo enredados a los tribunales y agitada la sociedad hasta que Casper la declaró loca y la metió en un manicomio.

Una mujer así, ¿es apta para el matrimonio? ¿puede serlo, cuando bajo la influencia del histerismo la inteligencia se aguza tanto como se extravía? ¿qué clase de crímenes no inventaría a su marido, en cuántos compromisos no pondría a su familia?

Es también una causa muy legítima de oposición al matrimonio, la epilepsia. Calcúlese una noche de bodas con un epilético! (*Risas*). Advirtiéndose que la epilepsia es trasmisible. Sobre todo, yo pregunto si hay algún legislador o eclesiástico que pueda negar la verdad de esta proposición: «Es necesario prohibir el matrimonio, cuando él va a ser causa de la muerte de uno de los que lo contraen». Ningún legislador dirá que no.

Hay un defecto físico, que denuncia una situación de este género en algunas mujeres: me refiero a la estrechez de la pelvis. Una mujer declarada con estrechez infranqueable de la pelvis, no debe casarse, no puede hacerlo; porque, siendo probable el embarazo y el tener hijos uno de los fines del matrimonio, esa mujer estará colocada entre el cumplimiento de su deber marital y la muerte, porque tendrá casi forzosamente que morir, salvo la rara excepción de los casos en que puede salvarse por medio de la operación cesárea.

Ahora bien; la legislación que tiene que tomar en cuenta todos los elementos componentes de la sociedad, no puede prescindir de estos hechos comprobados por la ciencia médica, y sería conveniente, como he dicho, que se introdujeran en las disposiciones legales, siquiera como causas de oposición al matrimonio.

Necesitamos también reformar el impedimento al voto.

La castidad no es una causa de oposición,

no es un impedimento, no debe serlo por la ley. Nadie tiene derecho a substraerse a las corrientes humanas, a las leyes naturales, por un voto, por una decisión voluntaria, adoptada quizás en un momento de entusiasmo o de error.

Debemos reformar también lo que se refiere a la herejía, puesto que admitimos el matrimonio de los herejes, de los que no son católicos, los protestantes, y de los que no tienen ninguna religión, con los católicos.

La herejía no puede ser causa, para la ley, de oposición al matrimonio.

En fin, señor presidente, necesitamos volver al Estado lo que es del Estado: la organización de la familia, la reglamentación de los derechos de los hijos.

El Estado no debe permitir que haya hijos cuya paternidad no pueda ser investigada. En este sentido la ley tiene también que atender una gran exigencia: debe borrarse del código la calificación de hijos sacrílegos. Para la ley no pueden existir sino hijos que nacen dentro de las prescripciones de la ley, o hijos que nacen fuera de las prescripciones de la ley.

Los derechos de los seres que nacen para la sociedad y que ésta tiene obligación de amparar, no puede depender del capricho de una profesión.

La ley no puede admitir que por el hecho de ser sacerdote el generador, el padre, no pueda reclamar el hijo todos los derechos que como tal tiene en una sociedad civilizada. (*Aplausos*).

La ley de matrimonio civil, pudiera ser atacada por este lado; pueden decir los timoratos: va a permitirse el matrimonio de los sacerdotes! Desde luego, sí, ya que no puede aceptarse que sea causa de oposición el voto y la castidad. Desde el momento que contrae matrimonio un sacerdote, deja de ser sacerdote para los fines de la Iglesia.

Así Europa entera, Europa civil ha admitido que los sacerdotes pueden casarse abandonando el sacerdocio.

No se necesita declarar, como en Austria, que el voto no obliga y que la castidad no es impedimento.

En los pocos casos que han ocurrido en La Plata, según un ilustrado juriscónsulto, con quien he hablado sobre esta materia, ya también la jurisprudencia se ha declarado en favor de las teorías que sustentó. Se ha reconocido como legítimo los derechos que nacen de la vida marital de los que fueron sacerdotes y abandonan el sacerdocio.

En virtud de este principio universal de legislación: «dentro de la ley o fuera de la ley», en el matrimonio legal todos los hijos tienen los derechos de los legítimos, y en el matrimonio no legal, tienen derechos que la ley señala para esa situación especial.

Pero se ha dicho, señor presidente, que el matrimonio es esencialmente un sacramento. Yo podría prescindir de tomar en cuenta este punto; pero, a pesar de la riqueza intelectual de los oradores que han sostenido la oposición al proyecto de matrimonio civil, la cantidad de sus argumentos es tan indigente, que debo ocuparme de los que más efecto han producido.

El matrimonio es esencialmente un sacramento, se dice.

Veamos si esto es verdad, según las teorías de los que no son sacerdotes, y aún las de los mismos canonistas.

La Iglesia establece que el matrimonio es un sacramento, sólo para ponerlo bajo la égida de la «gracia», único alcance de los sacramentos. Por lo demás, en cuanto se refiere a sus consecuencias como acto de la vida civil, los mismos cánones y sus comentadores reconocen el derecho con que el soberano de la tierra rige sus convenciones.

Dice el Abate Glaire en su *Enciclopedia Católica*, tomo 14, página 268: «El matrimonio clandestino se hacía sin ninguna ceremonia religiosa, sin la bendición nupcial; no era pues, un sacramento, sino un contrato puramente humano, en que la Iglesia no tenía parte alguna. Era, pues, esencial que el Concilio (de Trento) exigiese que todos los casamientos de los cristianos fuesen revestidos del sello de la religión y fuesen elevados a la dignidad de sacramento. Se pretende que la Iglesia no pudo establecer la clandestinidad por impedimento dirimente; *pro en el matrimonio existe el sacramento y el contrato civil*. Si los príncipes pueden prohibir a sus súbditos el contrato civil, trazar las reglas, los principios según los cuales ellos deben redactarlos; si pueden declarar las personas que están habilitadas para el matrimonio y aquellas que no pueden casarse,— la Iglesia tiene, indudablemente el mismo derecho; ella ha podido declarar nulos e írritos los matrimonios donde no se hubiesen observado los ritos y las ceremonias, cuya observación ha prescripto.»

Estas opiniones, emitidas en una obra esencialmente católica, dirigida por el abate Glaire, el vizconde Walsir y un Comité de Ortodoxia, no pueden ser resistidas como profanas o contrarias a las sanciones de la Iglesia.

En el matrimonio católico hay un sacramento, que protege al creyente con las bendiciones de la gracia divina, sólo imperan las leyes de la Iglesia. En cuanto al contrato civil, que sirve para regir y reglar las relaciones puramente temporales, del marido y la esposa, y de los hijos con los padres, sólo las leyes dictadas por los soberanos deben imperar, según lo enseñan los mismos «canonistas» que acaban de citarse.

No son casados de acuerdo con la Iglesia los que se casan sin el sacramento; pero, diversas veces ha reconocido la misma Iglesia el contrato.

El Papa Pío VI escribía en 179 al obispo de Luchon, a propósito del matrimonio civil, estas palabras, que debieran bastar a los católicos para tranquilizar sus conciencias, en cuanto a la ley en debate: «Para tener derecho a los efectos civiles, nada impide que los fieles hagan la declaración exigida por la Asamblea Nacional, sin perder un momento de vista que no es absolutamente sujetarse con los vínculos del matrimonio, sino llenar simplemente un acto puramente civil.» (Del Vaticano, 28 de Mayo de 1793, tomo 2, página 262).

Lo único que la ley en debate exige de los fieles católicos, es precisamente que hagan lo que el mismo Papa Pío VI declaraba que les estaba perfectamente permitido; lo mismo que el Concilio de Trento reconoció como válido para los tiempos pasados; puesto que lo que en esa Asamblea Ecueménica se llamó «matrimonios clandestinos», es decir, aquellos que se hacían sin la bendición nupcial, no eran otra cosa que los matrimonios que producían efectos puramente temporales y civiles, y que no alcanzaban la «gracia», porque no llegaban a ser sacramentos.

No es fuera de lugar, sin embargo, recordar que hoy mismo algunos matrimonios sin sacramento son reconocidos por la Iglesia. Cuando los protestantes casados se convierten al catolicismo, la Iglesia católica no ratifica su unión, ni les exige que reciban el sacramento del matrimonio. El contrato nupcial preexistente a la conversión se reputa válido, y la Iglesia en el regocijo que le produce este hecho ampara a los heréticos con su gracia, como si fueran verdaderamente casados ante ella.

Es oportuno también mencionar que los concilios no fueron por cierto lógicos, pues, por ejemplo, en tanto que el de Constantinopla declaraba heréticas y proscriptas las doctrinas del Pontífice Honorio, el de Roma acuerda la infalibilidad a los papas; «jamás han protestado» contra la intervención del Estado en el

contrato civil, que se llama ante la ley matrimonio.

Añadiré aún unos párrafos importantes y en extremo pertinentes del *Derecho Eclesiástico Universal* de Fernando Walter.

«San Agustín, particularmente, desmenuzó en el siglo V el espíritu y la extensión del derecho matrimonial cristiano. Con todo, no tuvo este derecho, influjo alguno en la legislación civil que siguió su dirección pagana, aun después de convertirse al cristianismo los emperadores. La Iglesia no llegó a la época de libertad y fuerzas completas, sino entre los pueblos germánicos recién convertidos y, si bien no alcanzó por de pronto a dar preponderancia a su derecho matrimonial sobre las costumbres nacionales que lo repugnaban, consiguió ponerlo en vigor paulatinamente y con ayuda de decretos de concilios y dietas. Desde entonces la legislación matrimonial se hizo mixta, al modo que la Constitución lo era; fijó la Iglesia las reglas necesarias y el poder secular les dió expresa o tácitamente fuerza de leyes civiles.» En los estados católicos se han mantenido así las cosas hasta estos últimos tiempos; mas los protestantes atribuyeron desde luego a los príncipes la facultad de hacer leyes sobre el matrimonio, o, por mejor decir, les pidieron «un nuevo derecho matrimonial», después de trastornar las bases del de la Iglesia católica... más adelante.

«Desde el tiempo de Justiniano se fué aproximando en oriente la legislación civil a la eclesiástica, de modo que en el siglo IX llegó a exigirse como requisito esencial, la bendición de la Iglesia.

«Como en los primeros siglos «existía un derecho matrimonial civil», inconciliable en muchas de sus partes con los principios del cristianismo, debía la Iglesia conservar su disciplina, sujetando a los fieles «a dar parte» de sus matrimonios al obispo, a fin de que si éste no les encontraba inconveniente, corriesen como puros y legítimos ante la Iglesia, que «ordinariamente» los bendecía. Cuando ya pudo obrar con más independencia, se hizo cargo de la naturaleza del matrimonio, que, a decir verdad, existe ya «con la sola intención de los contrayentes» y en consecuencia declaró que «reconocía como válida» toda unión formada con dicha intención entre cristianos, aunque, por otra parte, «careciese de formalidades.»

«Para evitar abusos se exigía que los matrimonios se anunciasen al pueblo y se autorizasen con la bendición sacerdotal; pero la omisión de estas circunstancias, no anulaba el contra-

to... «Son todavía válidos los matrimonios clandestinos en los reinos que no han recibido el Concilio de Trento (para los residentes no para los que de propósito se trasladan al país para contraer matrimonio).

«Es de advertir que el contrayente católico — en matrimonio con protestantes — puede, prescindiendo de la forma eclesiástica, someterse a la celebración del matrimonio ante la autoridad civil, y aun «ante un ministro de otro culto», siempre que lo haga por obediencia a las leyes de la tierra y sin ver en el ministro más que un empleado civil. (La congregación del Santo Oficio sentó esta máxima en 1672, Benedicto XIV la confirmó en sus obras de *Syn Diosesana*). Por último, resulta también que es inadmisibles la distinción entre asistencia activa y pasiva del sacerdote, puesto que toda asistencia, aun la que se limite a ver y oír, hace de la unión un sacramento y por consecuencia viene a parar en activa. Sí, no será parte esencial para el sacramento la bendición del sacerdote.»

Ahí se tiene, pues, las opiniones de los teólogos, de los canonistas, y de las decisiones de las corporaciones, cuya autoridad no puede ser rechazada por los opositores a este proyecto.

Que ha habido matrimonio sin sacramento, es evidente; todo el mundo se ha casado sin sacramento antes de la doctrina cristiana. Me bastaría citar a Escocia. Cavour, contestando precisamente a un señor que sostenía la misma doctrina que ha sostenido en esta Cámara el señor senador por Santa Fe, le decía: en Escocia el matrimonio civil, en la práctica, data de 50 años antes de la Reforma, de 1503. El Concilio de Trento se reunió en 1545, creo. Hay, pues, una diferencia de 40 años; y como 100 años antes del Concilio de Trento ya se practicaba el matrimonio civil en Escocia.

La Escocia es uno de los pueblos más morales y religiosos del mundo, y jamás ningún escocés ha sospechado que su unión no fuera bendita, sagrada, moral y conveniente para los fines de la familia humana, por no haber sido bendecida por el sacerdote.

El sacramento es un voto de la Iglesia, una bendición de la Iglesia, una manifestación.

Yo no soy muy fuerte en estas materias...

Sr. Pizarro. — ¿Quién no lo sabe?

Sr. Ministro del Interior. — Pero me parece que no digo un pecado al afirmar que es un voto que la Iglesia hace por la felicidad de los cónyuges.

No es tan sabido que no sea tan docto en estas materias: sé, por ejemplo, el Evangelio

de memoria, y lo mismo que decía yo de los jesuitas, puede aplicarse a algunos que no siendo clericales aprenden los libros de otros para comentarlos, y suelen aprenderlos bien.

Es un voto, pues, que hace la Iglesia; pero, puede tener el carácter que tienen otras bendiciones que la Iglesia da en diversas circunstancias de la vida.

¿Se quiere decir que es indispensable el sacramento, la bendición, el voto, las gracias para la felicidad de la familia?

De ninguna manera. Todas las ceremonias, todas las congratulaciones de los parientes y amigos, todos los hechos de la sociedad, en fin, forman un conjunto que sirve para la armonía y la solemnidad del acto; pero, no son indispensables.

Entre esas ceremonias, con un mérito que ellas porque se le da más importancia, entra también la bendición del sacerdote; pero, en el alma de una joven o de un joven que contrae matrimonio y respeta a su padre muchísimo y lo quiere, estoy seguro que hay esta persuasión: la bendición del padre de uno, la aprobación del círculo en que se vive, la bendición de la madre que se quiere, es para la conciencia más importante que la fórmula fría de un sacerdote extraño que viene y maquinalmente dice sus rezos. (*Aplausos*).

Sí, señor, estas manifestaciones del sentimiento impresionaban más el ánimo y se cree más en su eficacia que en las promesas que resultaban de las bendiciones mecánicas, concedidas en cumplimiento de una obligación.

Que dé la Iglesia en buena hora sus bendiciones; nadie las rechaza; son agradables, satisfactorias y necesarias para los creyentes; pero que este deseo, este voto no sirva para estorbar la autenticidad del acto, que es lo que busca y necesita el Estado y que es lo que ha procurado siempre, según se ve por la historia del desenvolvimiento del matrimonio de todos los siglos; porque esa autenticidad es de orden civil y moral; porque es indispensable para que el Estado lleve los registros del movimiento de su población.

La autenticidad tiene altos y trascendentales fines, y el Estado, por lo tanto, se halla en la obligación de reglamentar el matrimonio, obligación indispensable, y no puede bajo ningún pretexto entregar asunto de tanta importancia a ningún poder extraño. Debe estar en sus manos, tiene que estar en sus manos, y es un gran descuido que una nación deje pasar el tiempo sin recobrar para sí lo que le es propio e inherente.

¿Se quiere más pruebas de que ni aun para los cánones ni para los papas ha sido necesario al sacramento en el matrimonio? Aquí van.

Véase lo que contiene esta cita, como prueba incontestable de lo expuesto, cita que por sí sola resuelve la cuestión.

Los señores senadores saben que en estas materias no se puede inventar, y que el que inventa por más imaginación que tenga, corre riesgo de perderse en sus improvisaciones.

¿Cómo se hace la discusión en todos los parlamentos del mundo? Citando la opinión de otros, y me parece que cuando en el Parlamento argentino se cita la opinión de los ministros de otros países, de las comisiones, compuestas de sabios, de hombres respetables, para confirmar una doctrina, se llena un deber y se procura una enseñanza.

Así, pues, en este Senado se ha citado todo lo ocurrido en las sesiones francesas, cuando se trataba de la ley de matrimonio; y yo creo que hago un verdadero servicio facilitando a los que han de consultar después nuestras discusiones, transcribiendo lo que dicen los pensadores de Europa a este respecto y lo que se ha dicho a propósito de esta cuestión, recientemente en Italia — digo recientemente, con relación a más lejanos tiempos — por parte de la Comisión que sostenía el proyecto de Código Civil, en donde iba la reforma del matrimonio.

Tendrán tanto más valor estas citas, cuanto que concluirán, como digo, la cuestión a este respecto, y se verá también en ellas cómo responden sus datos a una porción de hechos que ya he citado.

Leo en un libro que contiene la relación de la Comisión especial compuesta de los senadores De Foresta, Ducoqué, Ferriqui, Gioia, Lanzilli, Mazzuchi, Stara, Vana y Vigliani, respecto al proyecto de Código Civil del Reino de Italia, presentado para ser iniciado en el Senado por el ministro de justicia y culto, Pisanelli, en las sesiones del 15 de Julio y del 26 de Noviembre de 1863:

«La institución del matrimonio considerada históricamente, responde a tres órdenes de principios: el orden natural, político y civil, y el orden religioso.

«El orden natural, como predominante e inmutable, se sobrepone al civil y al religioso: estos dos se encuentran en la historia de los pueblos ya unidos, ya separados según las diferentes formas de gobiernos. En los teocráticos y donde quiera que el sacerdocio se juntó con el imperio, el solo poder civil reguló el matri-

monio en las relaciones con la sociedad y la religión.

«Esto sucedió sin excepción en los pueblos de la antigüedad, los cuales acostumbraban investir a sus gobernantes con la potestad sobre las cosas sagradas.

«La sapiencia antigua refundió siempre en una sola autoridad el Estado y la religión, las dos grandes potencias que se dividen el imperio sobre el presente y el porvenir del hombre.

«Las sanciones civiles y las religiosas enlazándose a menudo en los mismos actos de la vida del hombre se daban recíprocamente auxilio, autoridad y eficacia.

«Cuando el sacerdocio se encontró separado del Imperio, cuando la potestad civil fué desligada del poder sagrado, el Estado y la religión dieron sanciones distintas al matrimonio.

«El Estado proveyó a su respecto en interés a la sociedad civil, la religión en las sagradas relaciones del hombre con la divinidad.

«Sin embargo, es importante advertir que ningún pueblo antes del cristianismo reputó necesario para la validez civil del matrimonio, que él fuese acompañado de ceremonias religiosas.

«Estas siempre se dejaron a la voluntad libre y espontánea de los esposos.

«A ningún legislador le ocurrió nunca obligarlos a invocar las bendiciones del cielo. Tampoco aquel pueblo que tuvo por legislador al Dios de quien se decía el elegido, hizo de la intervención del «sacerdote» o del rito sagrado una obligación en sus nupcias.

Nos lo atestigua el doctor Fleury, en su obra sobre las costumbres de los israelitas y de los cristianos en estos términos.

«Yo no veo que sus «matrimonios» fueran revestidos de ceremonias alguna religiosa, salvo las plegarias del padre de familia y de los asistentes para invocar la bendición de Dios. Tenemos un ejemplo en los casamientos de Rebecca con Isaac, de Ruth con Booz, de Sara con Tobias. Yo no veo que se ofrecieran sacrificios para este objeto, que se fuese al «templo» y que se hiciera intervenir «sacerdote»: todo se concluía entre parientes y amigos. De manera que el acto no era sino un contrato civil.

«De la misma manera en la Roma pagana la *confarreatis*, única forma religiosa conocida del matrimonio, aunque la más solemne y la más usada por los patricios de la antigüedad más remota, no era, sin embargo, una prescripción, sino para las nupcias de los pontífices y de los flaminios, mientras que las formas

coemptis et usus (compra y uso) y más tarde la *conventio in manum* — el sometimiento a la potestad marital ante el pretor — eran frecuentes en las clases populares. En las épocas menos lejanas la *confarreatis* había caído en desuso, por la multiplicidad de sus ritos y los gastos que ocasionaba, de manera que bajo el reinado de Tiberio difícilmente, según lo afirma un historiador fidedigno, se podrían encontrar cónyuges *confarreatis* (casados con la ceremonia llamada *confarreatis*).

«El único juez de las cuestiones matrimoniales ha sido, en general, el poder laico, que era el único regulador del matrimonio como institución civil.

«Esta condición del matrimonio respecto de la religión se mantuvo por muchos siglos después del triunfo y difusión de la religión de Cristo en el Oriente y en Occidente, hasta el Concilio de Trento, es decir, hasta después de la mitad del siglo XVI.

«Los matrimonios de los cristianos, elevados a la dignidad de sacramento, según las doctrinas católicas, se celebraban según las prescripciones de las leyes civiles, de las que los emperadores romanos, partidarios del nuevo culto publicaron muchas, a instancia y aprobación de la misma Iglesia; y después eran consagrados por los sacerdotes con la bendición nupcial aquellos matrimonios que los contrayentes solamente por costumbre piadosa y no por precepto religioso la imploraban. Y como las leyes civiles respetando en este caso la sencillez del derecho natural, reconocían la validez del matrimonio contraído aun con el solo consentimiento, *ex solo affectu*, según la expresión romana, así se produjo el abuso de los matrimonios llamados clandestinos, de los cuales faltando la prueba, la malignidad de los contrayentes cansados de su unión, era causa que a menudo se pisotease el vínculo y viéramos las adúlteras concubinas usurpar impunemente el puesto de la mujer legítima rechazada.

«De esos abusos se quejaban los príncipes cristianos, se quejaba la Iglesia; y reclamaban un remedio eficaz. Como la autoridad eclesiástica valiéndose de la mucha preponderancia adquirida sobre el seglar por la ignorancia de la edad media, había casi absorbido la legislación y la jurisdicción matrimonial por la tolerancia y la aquiescencia del poder civil; así es que los mismos príncipes se dirigían a la Iglesia para que pusiera un dique a los matrimonios clandestinos, dando una forma más cierta y más sincera a las uniones matrimoniales de los cristianos. La queja fué elevada a la

solemne asamblea de Trento, principalmente por la poderosa voz de Francia.

«Los padres tridentinos se ocuparon de eso seriamente, y sin poder desconocer en un principio la validez de los matrimonios clandestinos contraídos ya, los condenaban y declaraban nulos para lo futuro todos los matrimonios que no fuesen celebrados en presencia del párroco y de dos testigos. El motivo substancial de la nulidad no era y no podía ser el defecto de la bendición religiosa, la falta del sacramento, sino solamente la falta del elemento probatorio de la voluntad de los contrayentes, por cuya falta su unión clandestina se consideró como no existente por la aplicación del antiguo aforismo; *non esse et non apparere idem est jure*. (No ser o no aparecer, es lo mismo en derecho).

«Lo que resulta claramente es:

«1º Que en el Concilio se trató de encargar, no al párroco, sino a un notario de recibir los actos matrimoniales.

«2º De ahí, que, según el Decreto Tridentino, para la validez del matrimonio, basta la presencia del párroco, aunque fuera pasiva, sin su bendición. Precisamente porque el Concilio no quería tocar la esencia del sacramento del matrimonio, sino que se proponía solamente comprobar el acto civil, su decreto sobre la reforma matrimonial fué colocado no en la parte doméstica sino en la disciplinaria, lo que permitió a algunos soberanos que no quedaron contentos, no aceptarlo en sus estados: esto es lo que precisamente hacía «la cristianísima Francia», donde el poder civil sostuvo con la mayor constancia el derecho de introducir disposiciones en los matrimonios.

«Acerca del verdadero carácter de esta disposición del «Sinodo Tridentino», conviene también recordar, que el docto y pío arzobispo de Granada, como nos refiere el cardenal Pallavicino, nunca sospechado, observa: no ser subsistente lo que muchos decían, esto es que, el «matrimonio» y el «sacramento» son idénticos para los bautizos, de donde argumentaba que la Iglesia, no pudiendo cambiar la esencia del sacramento, tampoco podía cambiar la del matrimonio (acto civil); por consiguiente, si dos bautizados tienen intención de unirse en matrimonio solamente, es decir, sin querer recibir el sacramento, «entre ellos habrá matrimonio y no sacramento, como aquel que no es tomado por quien no lo quiere.»

«Esta distinción entre el acto del matrimonio y el sacramento, esta separación del elemento civil del religioso, aun en el matrimonio contraído ante el párroco, la que con tanta clari-

dad venía expresada por el precitado arzobispo, fué más tarde motivo de acaloradas controversias, cuando la autoridad eclesiástica vió y temió la consecuencia que de ella sacaban los filósofos y los publicistas, que se proponían reclamar para la soberanía laica el acto civil del matrimonio, dejando el sacramento al poder eclesiástico. Pero la Iglesia católica, no sólo nunca condenó la doctrina expresada por el arzobispo de Granada y sostenida después por los austeros prelados y doctores en teología, sino que la reconoció admisible con algunos de sus actos. (1)

«La reforma matrimonial tridentina se convirtió fácilmente en el derecho común en Italia, donde por la presencia del papado era más poderosa la autoridad del derecho canónico y donde la prolongada posesión en que se encontraba la Iglesia del derecho de arreglar los asuntos matrimoniales, había inducido a admitir la opinión general de que todo lo que se refería a las leyes y juicios sobre matrimonio fuese asunto enteramente religioso y substraído plenamente a las leyes y a los magistrados del Estado.

«Pero esta opinión que traía su primer origen de la benéfica influencia de las ideas cristianas sobre el derecho matrimonial romano y que había tomado mucho vigor, se había consolidado en la edad media en virtud del predominio también saludable que en aquellos tiempos dolorosos de ignorancia y superstición popular había adquirido el clero menos inculto, empezó a ser sometida a examen y combatida por el espíritu de libre investigación que con el renacimiento de las ciencias y de las artes se desarrolló en toda Europa.

«No se tardó en sentir la necesidad de deslindar los derechos del Estado de los de la Iglesia, que de una manera extraña se habían confundido en el matrimonio, como en muchas de las demás instituciones civiles. †

«La sociedad, que en la larga noche de la edad media se había vuelto esclava de las instituciones y de los ministros de la Iglesia, comprendiendo sus razones, se apresuró a reivindicar su investidura secular. Este trabajo, que llevaba a efecto paulatinamente en las escuelas, en los libros, y en los gabinetes, tocaba al período de su madurez, al terminar el siglo XVIII, que fué tan envidiado y recriminado.»

Señor presidente: Este proyecto de ley, ni siquiera es una novedad, porque es la repercusión de lo discutido y sancionado en todo el

mundo; no es siquiera una novedad porque ya tiene un antecedente: el proyecto de matrimonio civil presentado en tiempo del gobernador Oroño en Santa Fe y sancionado, pero desgraciadamente derogado después.

Este proyecto, como he dicho, se hará ley, modificándose o no sus artículos; se hará ley, porque es un deber de la Nación; y se hará ley, sobre todo, porque hay ciertas reformas que vienen en el torrente del desenvolvimiento de los pueblos y a los cuales nada detiene: ni el Congreso puede oponerse, ni el Poder Ejecutivo tampoco, ni el pueblo.

Esta es una de aquellas reformas que se hacen porque es necesaria su evolución. Parece que en ciertas épocas, falta hasta la iniciativa en las corporaciones, en los hombres, para oponerse con éxito, y que no hubiera libre albedrío, ni se tuviera la facultad de querer hacer lo contrario. El matrimonio civil viene forzosamente, y se producirá.

Voy a concluir, señor presidente, con gran satisfacción de mi auditorio y mía, por expresar qué es lo que se nos propone como remedio, y qué es lo que yo pienso de ese remedio propuesto por los opositores a este proyecto.

Mil veces, conversando íntimamente con algunas personas ilustradas, de aquellas que llamamos clericales, es decir, opositores a los liberales en esta y otras materias, no discutiendo, porque en la discusión siempre hay cierta acritud y amor propio empeñado de una y otra parte; no discutiendo, digo, sino hablando en amigable conversación, de aquellas en que cada uno busca acomodar sus ideas a las de su interlocutor o contradictor y se hace una especie de amalgama de la opinión, se me ha dicho alguna vez: ¿Por qué ir tan adelante en esto? ¿Qué propósito se persigue al herir las creencias populares? ¿No se ve que se ataca la religión, los principios inconvencibles de la moral pública? Esto traerá grandes trastornos.

Indudablemente, cuando se hacen argumentos en esta forma, aun los más fríos y los más empujados se dejan ablandar, y uno titubea, porque nunca se tiene la seguridad absoluta de la invariable verdad sosteniendo tal o cual idea teórica, uno se dice: ¿quién sabe si tendrán razón, si realmente no sería mejor proceder de otro modo si se ataca los derechos de alguno!

Sin embargo, es idea corriente que los católicos creen que solamente ellos están convencidos y solamente ellos dicen la verdad, que solamente ellos son sinceros.

Yo declaro con toda franqueza, señor presidente, que si tuviera un momento de duda, el amor propio, el orgullo, cualquier causa, cual-

(1) Es suficiente citar la grande autoridad de Benedicto XIV en su obra del *Sinodo Diocesano*, lib. 8. cap. XIII y el Breve de Pío VI de 17 de Julio de 1789 al obispo de Agria.

quier antecedente no me impediría pasar al otro lado y decir: estoy convencido.

Es, pues, con toda sinceridad que procedo, como lo hago, tratando de hacer lo que en mi opinión conviene al país, a la sociedad en que vivo, lo destinado a moralizarla.

Bien. ¿Cuál es el remedio insinuado así en conversaciones amistosas y repetido después como argumento en la prensa? Pero, señor, se nos dice: «¡Si hay un medio! ¿Esta sociedad no es cristiana, no es católica, su mayoría no es católica creyente, no reconoce un director espiritual, que es el Papa? Hagamos, pues, una experiencia: hagamos que esta sociedad se acomode legalmente con el poder espiritual, con el director de las almas. ¿Por qué no se busca un acuerdo entre los dos elementos: el poder temporal y el poder espiritual? En una palabra: ¿por qué no se hace un concordato, en el cual serían arregladas todas estas cuestiones que, por más friamente que se traten, siempre enconan y siempre producen enemistades e impulsos de desagradable oposición, odios y divisiones que felizmente, diré de paso, nunca proceden de nuestra parte? ¿Por qué no hacemos un concordato?, se dice. Ahí está el remedio de todo eso.»

No sé, señor presidente, si el gobierno argentino hará o no hará concordato. Eso corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero, si sé que si yo formo parte del gobierno me he de oponer con todas mis fuerzas a que se haga concordato alguno.

Sr. del Valle. — ¡Muy bien!

Sr. Ministro del Interior. — Yo no he de dejar de oponer todos mis argumentos con una tenacidad jesuítica, comenzando por el primero y acabando por el último. (*Aplausos*).

Creo que no hay nada más deprimente de la soberanía, nada más perjudicial a una nación que los concordatos, y nada más perjudicial a la Iglesia también.

Esos no son arreglos internacionales, señor presidente, no pueden serlo; son arreglos «sui generis», que no pueden llamarse tratados.

Los tratados tienen lugar entre naciones; en los tratados se da y se toma: las obligaciones y los deberes son recíprocos.

Los tratados son ajustados entre potencias que tienen más o menos los mismos elementos de vida. Pero el papado no es una nación, no tiene territorio, no tiene límites, no tiene fronteras, no tiene ejércitos, no tiene cámaras donde se discuta con la libertad que se discute aquí, no tiene, en fin, ninguno de los atributos de la nacionalidad; no es un poder propiamente dicho; es una institución puramente teó-

rica, es un gobierno ilusorio, es una autoridad de convención en la realidad de los hechos, más que de convención, es una entidad de tolerancia en cuanto a lo diplomático.

Por consiguiente, no puede tratar la Nación con el papado: no puede poner su derecho en frente de un «no» derecho.

En los concordatos ¿qué da la Iglesia a las naciones con las cuales trata? Nada.

¿Qué toma? Todo, comenzando por la soberanía y acabando por el último rasgo de independencia.

¿Qué reciprocidad hay por lo tanto en un concordato? En realidad un concordato es una imposición del papado, y todos los concordatos no dicen en resumen sino esto: «Usted no hará tal cosa; usted hará esta otra; cuando quiera hacer algo me pedirá permiso.»

¿Y usted qué me da, dice la Nación? Nada.

Los concordatos no son como los tratados de extradición entre potencias, en los que se establece cláusulas, como la siguiente, por ejemplo: «Cuando vayan los criminales a su territorio usted me los mandará, cuando vengan al mío yo se los entregaré.»

Procede siempre la reciprocidad, como se establece en los tratados de comercio, por ejemplo, respecto a tarifas.

¿Qué reciprocidad hay con la Curia Romana? Ninguna.

Los concordatos están, además, señor, históricamente repudiados; ahora los rechazan todas las naciones.

Sólo contienen imposiciones contra la soberanía y contra la libertad humana. Voy a dar la prueba, porque los señores senadores habrán observado que nunca hago una afirmación sin tener los documentos que la prueben.

En 1863 se hizo un concordato con el Ecuador y en 1864 otro con Nicaragua y San Salvador. Son dos concordatos, dos vergüenzas para las naciones que los firmaron. Véase sino. En ambos se establece que: «No se permitirá jamás la existencia de ningún culto, ni asociación condenada por la Iglesia; los obispos pueden proscribir los libros contrarios a la religión, atendiéndose al juicio que hagan de esos libros.» Por consiguiente, todos los monumentos de la literatura, de la historia, de todo lo que nos sirve para aprender, para saber algo, están condenados. No se admite ni a Laurent, ni a Comte ni a Bluntschli; no hay nada que pueda circular en ninguna de estas naciones. Es decir, se pone una traba, una mordaza y una venda en los ojos de las poblaciones para que no vean ni sepan nada.

«El obispo puede proscribir los libros con-

trarios a la religión; ningún maestro o profesor puede enseñar sin permiso del diocesano.» Estos escándalos han sido subscriptos por pueblos, por estados que se dicen independientes y soberanos.

«Los tribunales eclesiásticos conocen por sí solos en todo lo que concierne al matrimonio, a la fe, a las costumbres, etcétera.

«Los diezmos y el derecho de asilo en las iglesias serán conservados.»

En el siglo XIX, en 1863 y 64, hay gobiernos que subscriben esta proposición: los diezmos y el derecho de asilo serán conservados.

«Todas las órdenes religiosas podrán establecerse libremente.»

Examínese todo lo que acabo de citar y dígaseme si no es la negación de todas las declaraciones de la Constitución una por una. Con estos antecedentes, ¿cómo vamos a hacer concordatos?

Voy más adelante, señor presidente.

La Curia Romana no puede hacerlos de otro modo, por mayores deseos que tenga; no puede apartarse de su tradición, ahora menos que nunca; no puede desertar de las doctrinas que tiene y que impone.

El concordato de 1855 con Austria, ponía la dirección de las escuelas bajo la jurisdicción de los obispos; ellos podían separar a los maestros, sujetarlo todo a la legislación de la Iglesia.

Y esto es, pues, señor presidente, el remedio que se propone para atender a las necesidades de constituir la familia de los disidentes que vengan a habitar el suelo argentino!

Solamente comprendería que hiciéramos un concordato, si nos decidiéramos a atarnos las manos.

Para hacer concordatos tendríamos que borrar de nuestra Constitución la facultad que nos da de legislar.

¿El concordato sería para reformar las universidades, para reformar la enseñanza? ¿Qué obtendríamos con ello, qué ventaja nos sería procurada? Sólo veo una ventaja que pudiéramos obtener, y es la de limitar el número de fiestas, que afecta tanto a la producción. Pero, según mi opinión, señor presidente, bastaría para limitarlo, que el presidente de la República dijera: En los días de fiesta quedan abiertas las oficinas de la aduana. Para que el trabajo continúe no necesitamos, pues, concordatos; para eso bastaría una orden.

Si hiciéramos concordatos en los términos de los que se ha hablado, poco faltaría para que pusiéramos las oficinas públicas de toda la Nación bajo la dirección eclesiástica.

Pero supongamos, señor presidente, que a priori, todos estos principios ineludibles se salvaban.

¿Cómo procederíamos en la práctica?

No hay más que dos medios de hacerlo: o se manda un delegado de aquí a Roma para que trate directamente con el Papa o con quien este nombre, o el Papa nombra un encargado para que trate aquí con el nuestro.

Este encargado de la República Argentina o ha de ser un clerical o ha de ser un liberal; no admito que sea un término medio, en primer lugar, porque no existen los términos medios, y, en segundo lugar, porque si existiera este término medio, no haría nada, una vez por culpa suya, otras veces por oposición del Papa; es claro que el representante del Papa, sentado sobre sus dieciocho siglos de tradición y de inmovilidad, no puede salir de sus reglas, de manera que todo lo que se hiciera en un sentido o en otro, se haría en honor o en deshonor del representante de la República Argentina, del liberal o del ultramontano.

¿Hace el liberal un concordato de acuerdo con los principios y doctrinas de la Iglesia? Entonces es un traidor a su patria, desconoce su Constitución y sus leyes y traiciona su conciencia.

¿Procura el ultramontano un concordato de acuerdo con las declaraciones de la Constitución de la República Argentina? Entonces, sin obtener su fin, porque no lo obtendría, es un traidor a su conciencia. El dilema es forzoso, señor presidente: o traidor a la patria o traidor a la conciencia; y, como no hay un solo argentino que sea capaz de cometer semejante crimen, y como no hay un solo gobierno que sea capaz de aprobar semejante delito, señor presidente, no hay concordato posible.

¿Cuál es, entonces, señor presidente, la solución del problema?

Esta: que la Nación Argentina, libre y poderosa, dentro de su derecho, dicte sus leyes, obedeciendo a la ley eterna e inmutable de la historia, sin someter los actos de su soberana voluntad a ningún poder de la tierra.

He dicho.

Sr. Pizarro. — Pido la palabra.

Comenzaré, señor presidente, por el argumento último del señor ministro del interior, cuya conclusión es esta: el concordato es imposible; no se puede celebrar sin encontrar un traidor entre los argentinos para que pueda celebrarlo, como necesariamente sucedería, contra los intereses de la patria y en beneficio exclusivo de la Iglesia católica, institución extranjera, que carece de soberanía internacio-

nal, que no es contada como una personalidad en el número de los estados o en la familia de las naciones.

Resulta de esto, señor presidente, que la Constitución ha consagrado el mayor de los absurdos al establecer que las relaciones entre la Iglesia y el Estado se arreglen por medio del concordato.

Consecuencia, señor presidente: que esta Constitución es inepta para los tiempos actuales; consecuencia, señor presidente: que es necesario reformar esta Constitución.

Consecuencia, señor presidente: que es necesario establecer la separación entre la Iglesia y el Estado; y dar una Constitución de carácter puramente civil, rompiendo la unión jurídica existente entre estas dos instituciones.

Consecuencia, señor presidente: que es necesario volver a los tiempos en que las instituciones del cristianismo no tenían influencia de ningún género en las leyes, comenzando, como es natural, por la ley constitucional del país.

Por lo tanto, es necesario eliminar la influencia del cristianismo, y algo más, toda influencia religiosa en la vida social, para desenvolver, como lo he manifestado en discursos anteriores, este primer principio de una legislación atea: el principio de la fuerza en todos los diversos ramos de la legislación, constitucional, civil, criminal, internacional, etcétera.

Esta conclusión es absurda.

Esta conclusión peca contra la civilización del mundo.

Esta conclusión no podría sostenerse en el terreno del derecho internacional, porque sería negar la influencia cristiana que modificó las costumbres bárbaras de las naciones en sus relaciones internacionales, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra; sería necesario volver a la época de la conquista y fundar el derecho de la fuerza.

Sería necesario volver a la barbarie; sería necesario establecer el derecho de la fuerza, como principio informativo de las relaciones internacionales, substituyéndolo al principio cristiano de paz y de armonía entre las naciones, al principio de razón y de concordia, de mutuo avenimiento entre ellas, que excluye la guerra y funda el derecho moderno de paz y amistad recíproca, estableciendo el arbitraje y la transacción, como medios de terminar sus diferencias, derecho nacido, precisamente, del principio cristiano que informa hoy la legislación internacional. (*Aplausos*).

He aquí la primera consecuencia de la absurda conclusión del ministerio.

Supuesto y establecido ese primer principio como elemento informativo del nuevo derecho, sería forzoso desenvolverlo en todas y en cada uno de los ramos de la legislación interna, y se alcanzarían entonces las mismas y absurdas consecuencias que, prima facie, se notan al establecerlo en las relaciones del derecho internacional; concluyendo de esta suerte por fundar una nueva civilización de opresión y de barbarie.

Es, precisamente, lo que vengo estableciendo desde el principio de esta discusión, y lo que he comprobado antes de ahora históricamente.

Después de haber comenzado así por el fin este discurso, para ponerme en relación con el del señor ministro del interior, porque todo viene subvertido en este asunto, y es necesario así dar principio por el fin; yo voy a unir los extremos que aquel discurso, como pretende unir el ministro en este proyecto y en esta discusión dos extremos opuestos en todo, y vueltos al principio del discurso del señor ministro, contestando lo poco de doctrinario que en él se encuentra, y que reproduce el señor miembro informante de la Comisión en su último discurso.

Llama desde luego la atención, señor presidente, que esta ley que se presentaba a la República como prenda de paz y de concordia para todas las opiniones religiosas en disidencia; que esta ley que venía a salvarlo todo; que según se decía, no hería en lo más mínimo el sentimiento religioso de nadie, ni de los católicos, ni de los cuáqueros, ni de los anabaptistas, ni de ninguna de las sectas disidentes del cristianismo, se haya convertido por sus autores y sostenedores, y principalmente por el ministerio, en una arma de guerra contra la Iglesia católica, y contra todas las sectas cristianas; se haya convertido en arma de guerra contra la Constitución, contra todas las religiones de los habitantes del país; y que, desde la primera palabra que se ha pronunciado en apoyo de este proyecto, ella haya sido la negación más completa y absoluta de todo lo que puede tener relación con los sentimientos religiosos de todos, cualquiera que sea la comunión a que pertenezcan.

Así, por ejemplo, el señor miembro informante de la Comisión comenzaba por decir: Al estudiar este proyecto, la Comisión sólo ha entendido estudiarlo del punto de vista de la Constitución que nos habla «de leyes divinas», y que trata, simplemente de «leyes civiles»; eliminando así «toda influencia religiosa», toda noción de Dios, en la legislación del país y en la filosofía política de la Constitución.

Sobre este primer principio y especializando

un poco más la argumentación, el señor ministro de justicia y culto, nos larga una andanada sobre lo que hay de más caro para los católicos, y se pronuncia del modo más acerbo contra la Iglesia que la Constitución sostiene, hiriendo en lo más vivo el sentimiento nacional en sus creencias, al atacar los concilios, los pontífices, sus leyes canónicas; y no nos deja nada a que no le pegue fuego, como un inquisidor, mostrándose tan tolerante como nos decía ser aquéllos.

Viene después el señor ministro del interior y avanza todavía más en la revolución social, llegando hasta negar todas las religiones, y suprimiendo a Dios por completo, ataca la *Biblia* que era lo único que había quedado sin ser quemado por su colega, y nos dice que la *Biblia* es el libro más inmundo, más inmoral y más absurdo que se puede dar.

Señor presidente: ¿qué ha atacado el señor ministro del interior al atacar la *Biblia*?

¡Ha atacado el libro! La *Biblia* toma este nombre, porque ella es verdaderamente el libro; es el libro por antonomasia, es el libro por excelencia.

Al atacar la *Biblia* el señor ministro ataca el libro en sí; ataca, señor presidente, lo que la civilización no permite atacar; lo que en la actualidad respetan y veneran cuatrocientos millones de hombres, a quienes tiene que tratarse como ignorantes, como idiotas, que no saben distinguir lo racional de lo absurdo, lo moral de lo inmoral.

El señor ministro ataca así, no sólo al católico: ataca todas las sectas del cristianismo, disidentes de la Iglesia católica, y ataca además, las creencias de cinco millones de israelitas que hacen de este libro el libro de su veneración.

¡La *Biblia*! El señor ministro me perdonará que le diga, por más que quiera respetar su autoridad profesional como médico: la *Biblia* que no desprecia Pasteur, por ejemplo, que en mi concepto, al menos, no admite paralelo con el señor ministro desde el punto de vista profesional...

Sr. Ministro del Interior. — ¿Cree en la *Biblia* Pasteur?

Sr. Pizarro. — El señor ministro me perdonará que no pueda yo prestarle aquiescencia al hacer semejante juicio de la *Biblia*; de la *Biblia* que han respetado Bossuet, Fenelón, Séneca, Chateaubriand, tantas y tantas ilustraciones en cualquier ramo de la ciencia que los busque.

No se puede venir ante un Congreso que por lo menos, sabe lo que es la *Biblia*, a hablar en esta forma de ella.

¿Qué es la *Biblia*, señor presidente?

La *Biblia*, como obra de literatura, no tiene semejante en el mundo. No hay nada que haya imitado el libro de los salmos de David; ni por la energía de la frase, ni por la intensidad del pensamiento, ni por la multitud y vivacidad de las imágenes. Aquel libro no tiene igual *El Salterio*, el Libro de los Salmos no tiene semejante. Y el señor ministro dice que es un libro absurdo, inmoral, etcétera.

El libro de Job, señor presidente, es sublime: Lamartine no tiene palabras para encomiar el libro de Job: cree que la humanidad se condensa todo en él, y no encuentra nada escrito sobre la tierra igual al *percat dies in qua natus sum*.

Ahora, señor presidente, los otros libros de la *Biblia* son la obra de la más alta sabiduría como fuentes de la legislación y del derecho humano, por razón de las leyes mosaicas, leyes políticas, leyes civiles, agrarias, de higiene, etcétera, que han hecho de Moisés, hombre verdaderamente extraordinario, el tipo del caudillo y del legislador.

Nadie en la historia pisa más alto que Moisés en el concepto de todas las naciones, como legislador el más sabio, y como el caudillo y hombre de gobierno el más hábil.

Esto es la *Biblia*. ¿Y esto puede ser un libro de idiotas, un libro de brutos, un libro de necios, un libro absurdo e inmoral?

El libro de los *Evangelios* es de la moral más pura, es la moral que no hay nación en el mundo, ni hay hombre, incluso el señor ministro, que se atreva a decir que profesa una moral más pura que la moral del *Evangelio*. (*Aplausos*).

¡Este es el libro inmoral, señor presidente!; ¡esta es la *Biblia*!

La *Biblia* es la piedra de toque de todas las ciencias humanas; ningún ramo del saber humano se encuentra que sea extraño a la *Biblia*.

Los que estudian este libro con el espíritu con que lo ha examinado el señor ministro del interior, encuentran siempre, ya en astronomía, ya en geología, ya en historia natural, algo que oponer a la *Biblia* en sus enseñanzas sobre todas estas materias, porque de todas trata la *Biblia*.

Y sin embargo, las ciencias físicas y las ciencias sociales que están en relación con este libro, por más que se procure establecer contradicción con él, todas vienen, al fin, a estar en conformidad con la verdad bíblica, con las enseñanzas bíblicas.

Puede suceder que ciencias que están todavía en formación, como son las ciencias naturales,

en su mayor parte, no lleguen a establecer este perfecto acuerdo, desde el primer momento; pero a medida que las ciencias naturales, que son de nuestro siglo, y que no son más que medias ciencias hasta este momento, van avanzando, a medida que adelantan, se conciertan con la *Biblia* y llegarán a ponerse de perfecto acuerdo con el texto de ella.

Pero cualquiera que fuese su consonancia o discordancia con la ciencia, me basta establecer que en ese libro se condensan todas las ramas del saber humano para deducir que la *Biblia* es el libro de los libros.

Atacar este libro es hasta donde más se puede llevar el ataque a todas las creencias, a todas las convicciones religiosas!

¿Qué queda después de esto?

¿Qué queda, señor presidente, del discurso con que el señor ministro pretende fundar la ley de matrimonio civil?

¡Lo que nos decía el señor ministro: que es una ley de fuerza!

El nos ha dicho en efecto, que esta ley ha traído agitaciones; que predicán los frailes en los conventos: que van las mujeres y van los niños a sus sermones; pero nosotros, nos decía, los dejamos ir, los dejamos predicar, los dejamos hacer todo eso porque no hay temor de nada; no tenemos que temer de esas agitaciones; no harán nada.

¿Cuáles son, pues, los cuidados que podrán preocupar al gobierno en una ocasión como ésta, sino son estos movimientos de opinión, que le alejan simpatías, que le alejan el sentimiento del país?

¿Qué es lo que puede preocupar al gobierno, entonces, qué es lo que puede temer?

La revolución, «la fuerza», únicamente «la fuerza»!

¡Es que no tiene fe sino «en la fuerza»: es que no profesa otro dogma que «el de la fuerza»!

Pero si mañana hubiera quien sostuviera con las armas en la mano sus creencias religiosas, su dogma social y político, sin respetar esta falsa soberanía de la Nación, que se funda en «la fuerza», el señor ministro vendría a decirnos: revolucionarios; criminales; se levantan contra los poderes públicos de la Nación; es necesario castigarlos como delincuentes.

¿Cuál es, pues, la situación en que sea preciso colocarse?

Si nosotros los católicos nos mantenemos en el terreno de la discusión templada y de las manifestaciones tranquilas de opinión aunque entremos con acento viril a hacer valer estos derechos, nos llega la burla y el desprecio del

gobierno: si otra fuera nuestra actitud, tendríamos entonces la inquisición y la persecución del gobierno, para reprimir por la fuerza la rebelión, el delito contra la Nación!

En todo caso, tenemos siempre el estado de guerra, ya en el terreno de las armas, ya en el de la persecución cristiana de Juliano el Apóstata!

Bien; así se comprende que este proyecto no haya podido ser estudiado por el ministerio bajo los auspicios de la libertad.

Así se comprende que no haya hecho una demostración tendiente a establecer que este proyecto responde a un concepto verdaderamente liberal, y que sea expresión del sentimiento de la libertad.

Pero qué!; si hasta la noción de la libertad ha perdido el ministerio...!

Mi honorable amigo el señor doctor Posse, pretendiendo dar una definición de la libertad, para impugnar el concepto filosófico que yo establecí acerca de ella, fundándola en la noción del «deber», se contentó con decir que la libertad es una facultad; y pasó de largo.

¿Es una facultad?

¿Facultad para qué?

¿Para robar, para matar, para pegarle fuego a la Casa Rosada? ¿Para qué es esta facultad? ¿Por qué no la define por su objeto el señor ministro?

Pues la libertad no es una facultad, señor presidente; la libertad es el resultado de «dos facultades humanas»; es el producto en las acciones humanas de estas dos facultades: la inteligencia y la voluntad.

El demente que comete un hecho que sería criminal, no es criminal él mismo, porque falta al acto moral «la razón» en el agente, la intervención en el acto de esta facultad que se denomina la «inteligencia». El hombre en estado de razón, o de inteligencia, cuyo brazo movido por la fuerza comete el mismo hecho, podrá ser un desgraciado, pero tampoco es un criminal: su conciencia, no obstante que se da cuenta del hecho que realiza, queda tranquila, no se altera, no sufre remordimientos, y no hay tampoco libertad en este acto, porque no interviene en él «la voluntad».

Es necesario, entonces, para que la libertad exista, que concurren las dos facultades: la inteligencia y la voluntad en la ejecución del acto; esto prueba que la libertad es propia sólo del «espíritu», es una cualidad del alma humana, y consisten, únicamente en el cumplimiento del «deber», como lo tengo anteriormente expresado.

Para que haya libertad se requiere, en efecto, que el acto humano se ejecute en conformidad a la ley: no se puede ejercitar fuera de ella. Por eso yo decía: la libertad es un «deber», antes que un «derecho»; no se puede ejecutar libremente el acto, sino en conformidad a la ley del ser racional»; si se ejecuta contra ella, entonces hay abuso de la libertad, hay «licencia»; hay «opresión» de una causa extraña a la «propia ley del ser moral».

¿No seré libre yo cuando con arreglo a la ley respete la propiedad ajena?; ¿será libre el comunista cuando contra la ley atente a la propiedad y procure subvertir todo el orden civil y social en relación a la propiedad?; ¿será libre el ladrón, el incendiario, todos aquellos que obran contra la ley y se ponen fuera de la ley; y no serán libres todos aquellos que están dentro de ella y obran en conformidad a ella por un acto emanado de su inteligencia y de su voluntad que les conduce a conformar sus acciones con la ley?

La libertad no se concibe sino «en la ley»; y yo no sé cómo el señor ministro de justicia y culto, cómo el miembro informante de la Comisión, al tratar de la libertad no han comprendido esto que pasa como un axioma vulgar: la libertad en la ley, el orden en la ley, la moral en la ley; que establece la libertad en todos los órdenes de la vida racional.

Señor presidente: hay a este respecto las dos teorías que he venido estableciendo en toda esta discusión, las dos escuelas, las dos tendencias; la una que habla de la libertad como de un derecho, la otra que habla de ella como de un deber; la una que proclama «los derechos del hombre» en la Revolución Francesa, que el principio de la «fuerza» tiene su punto de partida en nuestro siglo; la otra que proclama «los deberes del hombre» en el Sinaí, y que funda el principio de la libertad en las acciones humanas.

La Revolución Francesa que comenzó olvidando la noción del «deber», olvidó así la noción de la «libertad»; y al establecer simplemente la noción del «derecho» desconociendo la naturaleza moral del hombre, y la soberanía de Dios sobre la «razón» humana, fundó el principio de la «fuerza» en la conciencia y en la legislación de las naciones que siguen aquel falso dogma, al declarar que no hay una «ley suprema», una «ley divina» que se alee sobre la soberanía de la razón humana y por lo tanto, sobre la soberanía política de las naciones.

Para la Revolución, la razón humana es la razón soberana; la voluntad humana, es la vo-

luntad soberana — la razón y la voluntad nacional son la ley soberana. No hay «ley divina», no hay razón divina: no hay voluntad divina: en una palabra, no hay Dios, todo es materia: las leyes son meras «leyes civiles», y, por consiguiente, leyes de fuerza; todo es «fuerza».

Volvemos así al principio de mi primer discurso en que procuré deslindar el campo de las dos escuelas, y clasificar el principio de la libertad en contra de la escuela ministerial en este momento representada por los dos señores ministros, de justicia y culto, y del interior, que sólo fundan el principio de la fuerza y no hablan sino en nombre de la fuerza para el creyente, para el cristianismo, para el católico. (*Aplausos*).

Sí, ¡la «fuerza»! Para ser libre no bastan sólo manifestaciones racionales de la opinión; es necesario la «fuerza»; y a fe en cierto modo no dejan de tener razón!

La libertad no es nada que esté fuera de nosotros mismos; la libertad está dentro del propio ser; es la ley del espíritu. La libertad es la ley de gravitación del espíritu a su centro, que es Dios.

En la materia, la ley es la gravitación de los cuerpos, su atracción al centro de la tierra. En el orden espiritual, la libertad es espíritu y a donde va el espíritu emanado de él.

Siendo esto así, y estando la libertad dentro de nosotros mismos, se concibe la burla sarcástica del señor ministro del interior, cuando decía: nada pueden: están perfectamente dominados; no tienen «fuerza» para hacer cambiar esta situación; es decir, no tienen «libertad».

Y ciertamente la libertad se «conquista» por la «fuerza»!

Según esto, la teoría del señor ministro al despreciar las manifestaciones racionales y los movimientos tranquilos de la opinión, como de ninguna importancia para el gobierno, establece claramente cuál es el principio informativo del gobierno, y dice: «gobierno es fuerza» no «la libertad».

Esta es la primera consecuencia de su discurso.

La segunda consecuencia es que el espíritu público ha muerto, porque no se presenta armado de la fuerza.

¿Y por qué señor presidente, al hablar de la libertad de los pueblos, se habla siempre del «espíritu público»? Porque la «libertad» es «espíritu», y donde no hay espíritu público, no hay libertades públicas. Los pueblos en que no se siente el espíritu público no son pueblos libres: son pueblos que considerando que la

«libertad» es un «derecho» han abdicado «la libertad», han abdicado «su derecho», han renunciado a las inspiraciones de la conciencia y subscriben todo lo que «la fuerza» les impone, cediendo así a la conveniencia individual, al interés egoísta a una moral sensual.

Esta es la filosofía del discurso del señor ministro.

Y esto mismo demuestra, señor presidente, donde existe actualmente «la libertad».

¿Quién es el que se atreve a oponerse a este gobierno? ¿Quién se atreve a levantarse hoy de frente y hacer esta oposición del espíritu, esta oposición de las ideas? ¡La Iglesia!

La Iglesia, madre de la libertad; la Iglesia, paladín de todas las libertades!

Así, aun en los momentos presentes y en la misma República Argentina, viene a confirmarse el principio de la historia: la Iglesia defendiendo las libertades públicas; la Iglesia luchando sola contra el poder temporal de las naciones!

Cuando los partidos políticos han desaparecido, y no hay influencia alguna predominante en el país; cuando todos doblan la frente y nadie se atreve a oponer una acción social eficiente contra el gobierno, sólo la Iglesia con sus obispos, sus frailes, y los que como yo pensamos y hacemos con ella un solo cuerpo, se resuelve a sostener esta lucha desigual, defendiendo la libertad común. Esta es y esta ha sido siempre la historia: estas han sido siempre las luchas de la Iglesia con los poderes temporales de la tierra, en todas las épocas.

Pero, señor presidente, en el terreno de la discusión me parece que algo avanzamos, aunque no tanto como fuera de desear; siempre hemos llegado a establecer esta conclusión: la Constitución es cristiana; y esto ya es algo. El miembro informante de la Comisión, que comenzó declarando que en la Constitución no había nada que se relacionase con leyes divinas, ha concluido en su último discurso por decirnos que la Constitución no sólo es espiritualista, que ya es mucho decir; no sólo confiesa a Dios como fuente de toda razón y justicia lo que da a las leyes su «carácter divino» sino también que es «cristiana» lo que basta para poner en contradicción el discurso del señor miembro informante de la Comisión con el del señor ministro del interior que queda así contestado por el señor miembro informante, cuando el señor ministro tan ardientemente ha atacado el cristianismo en sus bases, al atacar el libro de los cristianos: la *Biblia*. La contestación al señor ministro está ahí; ahí está, puede decirse, la contestación a la idea fundamental

de su discurso, que es excluir toda religión de la Constitución y de las leyes.

Pero, vamos a esto. ¿La Constitución es meramente cristiana, como se confiesa ya, o es eminentemente católica, como lo he sostenido yo?

Yo he demostrado que la Constitución es católica; y las demostraciones que de ello he hecho, no han sido contestadas hasta este momento. Alguna que otra idea ha apuntado en contra el señor ministro de justicia y culto; pero sin establecer, como dije en otra ocasión, la filosofía política de la Constitución; sin establecer cual será a este respecto el sistema filosófico de la Constitución. El señor ministro de justicia y culto ha estudiado aisladamente este o aquel artículo constitucional, y no nos ha dicho cuál sea la filosofía política de la Constitución, habiéndose limitado a una que otra frase ligera y de pasacalle, como para salir del compromiso, y ha pasado de largo.

Pero, se pretende establecer «a priori» la incompatibilidad del principio católico con la filosofía política de la Constitución y yo digo, señor presidente, que esta Constitución es esencialmente católica y que está fundada en la misma doctrina del catolicismo en materia de libertad, y en la enseñanza de la Iglesia católica hasta en este preciso instante.

Se dice que la Iglesia católica no reconoce la libertad de conciencia, ni la libertad de cultos, ni la libertad de la prensa; que no reconoce, en fin, todas esas libertades que ha catalogado el señor ministro del interior y en cuya recopilación lo ha precedido el miembro informante de la Comisión.

Señor presidente: el Hildebrando del siglo XIX, León XIII; éste que en nuestros días obliga la voluntad imperial a consultar la voluntad del pontífice en lo relativo a la visita del emperador de Alemania al Quirinal; éste, Sobe-rano sin Estados, encerrado en los estrechos límites del Vaticano, quizás más oprimido que en los peores tiempos de la Edad Media, pero árbitro todavía de los destinos del mundo, y llamado a resolver como en la Edad Media las contiendas de las grandes naciones, y establecer la paz entre ellas, como ha sucedido con Alemania y España en la cuestión de Las Carolinas; éste, cuya autoridad moral en nuestro siglo domina la política de los más grandes estadistas, e influye en la legislación de los imperios más poderosos de la tierra, hasta obligar a Bismark a capitular con él, retirando las leyes de Mayo; éste, que ejerce la más alta autoridad moral del mundo a que no puede substraerse la política de las naciones europeas, así, ence-

rrado en su cárcel estrecha; éste, acaba de dar al mundo la enseñanza de la Iglesia católica en todos los siglos, en su última Encíclica sobre la libertad, estableciendo el concepto que la Iglesia tiene y en todo tiempo ha tenido de la libertad, que no es otro que el consignado en nuestra Constitución al hablar de la soberanía popular, de la libertad de cultos, de la libertad de conciencia, etcétera.

¿Cómo puede la Iglesia católica, que parte de un principio en diametral oposición con el «liberalismo» que tanto nos ponderó el señor ministro, llegar a establecer en nuestros tiempos este avenimiento de la religión con la libertad en las naciones modernas?

Lo dice el maestro infalible de la verdad en su Encíclica «libertas prestantísima». Después de establecer el verdadero concepto de la libertad, dice:

«¡A pesar de todo, la Iglesia se hace cargo maternalmente del grave peso de la humana flaqueza, y no ignora el curso de los ánimos y de los sucesos por donde va pasando nuestro siglo. Por esta causa y sin conceder el menos derecho sino sólo a lo verdadero y honesto, no rehuye que la autoridad pública soporte algunas cosas ajenas de verdad y justicia, con motivo de evitar un mal mayor o de adquirir o conservar mayor bien. Aun el mismo providentísimo Dios, con ser de infinita bondad y todopoderoso, permite que haya males en el mundo, parte para que no impidan mayores bienes, parte para que no se sigan mayores males. Justo es imitar en el gobierno de la sociedad al que gobierna el mundo; y aun por lo mismo que la autoridad humana no puede impedir todos los males, debe «conceder y dejar impunes muchas cosas, que han de ser, sin embargo, castigadas por la divina Providencia, y con justicia.» Pero en tales circunstancias, si por causa del bien común, y sólo por ella, puede y aun debe la ley humana tolerar el mal, no puede, sin embargo, ni debe aprobarlo ni quererlo en sí mismo porque, como el mal en sí mismo es privación de bien, repugna al bien común, que debe querer el legislador y defenderlo cuanto mejor pueda. También en esto debe la ley humana proponerse imitar a Dios, que al permitir que haya males en el mundo, «ni quiere que los males se hagan, ni quiere que no se hagan, sino quiere permitir que los haya, lo cual es bueno», sentencia del doctor Angélico, que brevísimamente encierra toda la doctrina de la tolerancia de los males.»

Después de esto la Encíclica entra a hablar de la libertad política y civil en orden a los diversos objetos de ella a que se refieren el se-

ñor ministro del interior y el miembro informante de la Comisión al hablar de la libertad de enseñanza, de cultos, de la prensa, etcétera; y la Encíclica habla de ellas como la Constitución misma que, en ninguno de estos casos habla, por cierto, de la libertad filosófica de conciencia, ni de la libertad filosófica para pensar y decir todo lo que se quiera decir y pensar; sino sujetas a las consiguientes responsabilidades morales, políticas, sociales, por la transgresión de las leyes de la razón y de la lógica, y de las mismas leyes civiles que hacen punibles el abuso de la libertad en la emisión del pensamiento, o en los actos que ofenden la moral, el interés de la sociedad, el derecho de un tercero, etcétera.

La Encíclica como la Constitución, niegan esa «libertad absoluta» de que habla el Poder Ejecutivo en su mensaje, de que nos ha hablado el señor ministro del culto y de que acaba de hablarnos en su discurso el señor ministro del interior; pero la Encíclica como la Constitución, autorizan todas aquellas libertades a que ellos se refieren, y que esta consigna en muchos de sus artículos.

Esta «libertad absoluta» que no puede existir ni en el orden filosófico, ni en el orden moral, ni en el orden social como se pretende, ni la sancionan la Constitución, ni la enseña la Iglesia católica, porque eso no es la «libertad».

La Encíclica establece desde luego, lo que es la libertad que evidentemente se funda en la noción del «deber» y consiste en el cumplimiento del «deber».

Establecido este primer principio, el Santo Padre expone la doctrina de la Iglesia, esa doctrina que ha creído atacar el señor ministro del interior, sobre la soberanía de las naciones, sobre la unión jurídica de la Iglesia y del Estado, y sobre los demás puntos constitucionales en que ha reproducido el discurso del señor miembro informante de la Comisión. El dice en su Encíclica, lo siguiente:

«Y juntando en gracia de la claridad, brevemente y por sus capítulos, todas nuestras doctrinas y sus consecuencias, he aquí su resumen. Es imprescindible que el hombre todo se mantenga verdaderamente y perfectamente bajo el dominio de Dios; por tanto, no puede concebirse la libertad del hombre, si no está sumisa y sujeta a Dios y a su voluntad. Negar a Dios este dominio o no querer sufrirlo no es propio del hombre libre sino del que abusa de la libertad para rebelarse; en esta disposición del ánimo es donde propiamente se fragua y completa el vicio capital del «liberalismo». El cual tiene múltiples formas, porque la voluntad pue-

de separarse de la obediencia debida a Dios, o a los que participan de su autor dad, no del mismo modo ni en un mismo grado.

«Es claro que rechazar absolutamente el sumo señorío de Dios y sacudir toda obediencia, lo mismo en lo público que en la familia y privadamente, así como es perversión suma de la libertad, así es también pésimo género de «liberalismo»; y de él ha de entenderse enteramente todo lo dicho.

«Próximo a éste es el de los que confiesan que conviene someterse a Dios, Criador y Señor del mundo, y por cuya voluntad se gobierna toda la naturaleza; pero audazmente rechazan las leyes que exceden la naturaleza, comunicadas por el mismo Dios en puntos de dogma y de moral, o a lo menos aseguran que que no hay porque tomarlas en cuenta, singularmente en las cosas públicas. Ya vimos antes cuanto yerran éstos y cuan poco concuerdan consigo mismos. De esta doctrina mana como de origen y principio la perniciosa teoría de la separación de la Iglesia y del Estado; siendo, por el contrario, cosa patente que ambas potestades, bien que diferentes en oficios y desiguales por su categoría, es necesario que vayan acordes en sus actos y se presten mutuos servicios.

«A esta opinión, como a su género, se reducen otras dos. Porque muchos pretenden que la Iglesia se separe del Estado toda ella y en todo; de modo que en todo el derecho público, en las instituciones, en las costumbres, en las leyes, en los cargos del Estado, en la educación de la juventud, no se mire a la Iglesia más que si no existiese; concediendo a lo más a los ciudadanos la facultad de tener religión, si les place, privadamente. Contra estos tienen toda su fuerza los argumentos con que refutamos la separación de la Iglesia y del Estado, añadiendo ser cosa absurdísima que el ciudadano respete a la Iglesia y el Estado la desprecie.»

Y luego agrega:

«Otros no se oponen, ni podrían oponerse, a que la Iglesia exista, pero le niegan la naturaleza y los derechos propios de sociedad perfecta, pretendiendo no competirle el hacer leyes, juzgar, castigar, sino sólo exhortar, persuadir y aun regir a los que espontánea y voluntariamente se le sujetan. Así adulteran la naturaleza de esta sociedad divina, debilitan y estrechan su autoridad, su magisterio, toda su eficacia, exagerando al mismo tiempo la fuerza y potestad del Estado hasta el punto

de que la Iglesia de Dios quede sometida al imperio y jurisdicción del Estado, no menos que cualquier asociación voluntaria de los ciudadanos. Para refutar esta opinión valen los argumentos usados por los Apologistas y no emitidos por Nos, singularmente en la Enciclica *Immortale Dei* con los cuales se demuestra, por institución divina, esencial a la Iglesia cuanto pertenece a la naturaleza y derechos de una sociedad legítima, suprema y por todas partes perfecta.

«Por último, hay muchos que no aprueban la separación entre las cosas sagradas y las civiles; pero juzgan que la Iglesia debe condescender a lo que la moderna prudencia desea en la administración de los pueblos. Este parecer es honesto si se entiende de cierta equidad que pueda unirse con la verdad y la justicia; es decir, que la Iglesia con la probada esperanza de algún gran bien, se muestre indulgente y conceda a los tiempos lo que salva siempre la santidad de su oficio, puede concederles. Pero muy de otra manera sería si se trata de cosas y doctrinas introducidas contra justicia por el cambio de las costumbres y los falsos juicios. Ningún tiempo hay que pueda estar sin religión, sin verdad, sin justicia y como estas cosas supremas y santísimas han sido encomendadas por Dios a la tutela de la Iglesia, nada hay tan extraño como el pretender de ella que sufra con disimulación lo que es falso o injusto, o sea connivente en lo que daña a la religión.

«Síguese de lo dicho que no es lícito de ninguna manera pedir, defender, conceder la libertad de pensar, de escribir, de enseñar, ni tampoco la de cultos, como otros tantos derechos dados por la naturaleza al hombre. Pues si los hubiera dado en efecto, habría derecho para no reconocer el imperio de Dios y ninguna ley podría moderar la libertad del hombre. Síguese también que, si hay justas causas «podrán tolerarse estas libertades», pero con determinada moderación, para que no degeneren en liviandad e insolencia. Donde «estas libertades estén vigentes, usen de ellas para el bien de los ciudadanos», pero sientan de ellas lo mismo que la Iglesia siente. Porque «toda libertad» puede reputarse legítima, con tal que aumente la «facilidad de obrar el bien»; fuera de esto nunca.

«Cuando tiranice o amenace un gobierno, que tenga a la nación injustamente oprimida, o arrebathe a la Iglesia la libertad debida», es justo procurar al Estado «otro temperamento», con el cual se pueda obrar libremente; porque

entonces no se pretende aquella libertad inmoderada y viciosa, «sino que se busca algún alivio para el bien común de todos;» y con esto únicamente se pretende que allí donde se concede licencia para lo malo, no se impida el derecho de hacer lo bueno.

«Ni es tampoco mirado en sí mismo, «contrario a ningún deber» el preferir para la república un modo de gobierno moderadamente popular...»

He aquí, pues, que la Iglesia reconoce precisamente la soberanía nacional, como una delegación suprema de Dios, de quien deriva «la razón humana», representada en la forma de gobierno democrático por «la razón pública», por la opinión pública, por la «voluntad nacional».

Es la proposición que me permitirá recordar al señor ministro de Culto con una frase de colegio, con una frase estudiantil: es la «proposición canchera» que defendíamos, de estudiantes, como lo sabe muy bien el señor ministro. *Suprema principium autoritas a Deo provenit mediante; immediate autem a populo.*

El Poder social proviene, así, mediatamente, de Dios, como fuente y origen de toda razón y justicia, como autor de todo orden racional, como autor de todo lo creado; pero inmediatamente, proviene del pueblo.

Este es el origen del poder público, cualquiera que sea la forma de gobierno, aun en las monarquías o autoeracias, lo mismo que en las repúblicas democráticas, pues no existe en aquellos sino por el asentimiento tácito de la Nación, árbitra de sus destinos, dentro de la ley moral que reconoce a Dios por Soberano Señor de las naciones.

Esto no conviene, sin embargo, con la doctrina del «liberalismo» que niega a Dios en el gobierno de las sociedades humanas, y funda la «soberanía absoluta del Estado» que no puede sostenerse en nombre de un verdadero principio filosófico, sin suprimir la «libertad humana», y constituir el principio de «la fuerza», como primer principio en la sociabilidad humana y en el gobierno de la sociedad.

La Iglesia haciendo así la exposición de la filosofía católica, que no es otra que la filosofía política de la Constitución Nacional, nos dice así:

«...Ningún género de gobierno reprueba la Iglesia» con tal que sea apto para la utilidad de los ciudadanos, pero quiere, como también lo ordena la naturaleza, que cada uno de ellos esté constituido sin injuria de nadie, y singu-

larmente dejando íntegros los derechos de la Iglesia.»

«Tomar parte en los negocios públicos, a no ser donde por la singular condición de los tiempos se provea otra cosa, es honesto; y aún más, la Iglesia aprueba que cada uno contribuya con su trabajo al común provecho, y en cuanto alcancen sus fuerzas defiendan, conserven y haga prosperar la cosa pública.

«Ni condena tampoco la Iglesia el deseo de que una nación no sirva a ningún extranjero ni a ningún Señor, con tal que esto pueda hacerse quedando la justicia incólume: ni reprende por último, a los que procuran que las ciudades vivan con leyes propias y los ciudadanos gocen de más amplia facultad de aumentar sus provechos. Siempre fué la Iglesia fidelísima fautora de las libertades cívicas templadas: y bien lo atestiguan en especial las ciudades de Italia, que lograron por medio «de los derechos del municipio — secuestrados entre nosotros — prosperidad, riquezas, nombre glorioso», durante el tiempo en que, sin impedirlo, nadie se dejaba sentir en todos los órdenes de la sociedad la influencia saludable de la Iglesia.»

Es así, señor presidente, como la Encíclica *Libertas*, última de su santidad León XIII, documentos que expresa la doctrina de todos los siglos en la Iglesia católica, documento que ha conmovido a Europa entera, y que demuestra la profunda sabiduría del que hoy rige la Iglesia, y su espíritu verdaderamente político, se armoniza con nuestra Constitución nacional.

Son, pues, completamente falsas las conclusiones del señor ministro del interior y del miembro informante de la Comisión, tendientes a establecer la incompatibilidad de ciertas disposiciones de la Constitución con la doctrina de la Iglesia católica, a fin de concluir que la Constitución aunque cristiana, no es católica. Es no solamente cristiana como se reconoce al fin, sino también católica según la doctrina de la Iglesia en la Encíclica que acabo de leer.

3

Sr. del Valle. — Hago moción para que se levante la sesión.

—Suficientemente apoyada se vota y es aprobada la moción.

—Eran las 6 y 50 p. m.